



REPÚBLICA ARGENTINA  
**VERSIÓN TAQUIGRÁFICA**

(PROVISIONAL)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Período 129°

**16° Reunión – 2° Sesión extraordinaria – 21 y 22 de diciembre de 2011**

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. **Amado Boudou**,  
de la señora presidenta provisional del H. Senado, senadora Beatriz **Rojkes de Alperovich** y  
del señor vicepresidente del H. Senado, senador **Gerardo Rubén Morales**.

Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Juan Horacio Zabaleta**

Prosecretarios: señor D. **Luis Borsani**, señor D. **Mario Daniele** y  
señor D. **Gustavo Carlos Vélez**

---

**PRESENTES:**

AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
ARTAZA, Eugenio J.  
BARRIONUEVO, Walter Basilio  
BASUALDO, Roberto G.  
BERMEJO, Rolando A.  
BIANCALANI, Fabio D.  
BLAS, Inés Imelda  
BONGIORNO, María José  
BORELLO, Marta Teresita  
CABANCHIK, Samuel M.  
CA BRAL ARRECHEA, Salvador  
CANO, José M.  
CASTILLO, Oscar A.  
CIMADEVILLA, Mario J.  
COLAZO, Mario J.  
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María  
CORREGIDO, Elena M.  
DE LA ROSA, María Graciela  
DI PERNA, Graciela A.  
DÍAZ, María Rosa  
ESCUDERO, Sonia M.  
ESTENSSORO, María Eugenia  
FELLNER, Liliana B.  
FERNÁNDEZ, Aníbal D.  
FILMUS, Daniel F.  
FUENTES, Marcelo J.  
GIMÉNEZ, Sandra D.  
GIUSTINIANI, Rubén H.  
GODOY, Ruperto Eduardo  
GONZÁLEZ, Pablo G.  
GUASTAVINO, Pedro G.  
GUINLE, Marcelo A.  
HIGONET, María de los Ángeles  
IRRAZABAL, Juan Manuel  
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle  
JUEZ, Luis A.  
LABADO, María Esther  
LATORRE, Roxana I.

LEGUIZAMON, María Laura  
LINARES, Jaime  
LÓPEZ, Osvaldo R.  
LORES, Horacio  
LUNA, Mirtha María T.  
MANSILLA, Sergio F.  
MARINO, Juan C.  
MARTÍNEZ, Alfredo A.  
MAYANS, José M.  
MEABE, Josefina A.  
MENEM, Carlos S.  
MONLLAU, Blanca M.  
MONTERO, Laura G.  
MORALES, Gerardo R.  
MORANDINI, Norma E.  
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.  
NIKISCH, Roy A.  
PARRILLI, Nanci M.  
PÉREZ ALSINA, Juan A.  
PÉRSICO, Daniel R.  
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.  
PICHETTO, Miguel Á.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RÍOFRÍO, Marina R.  
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.  
ROLDAN, José M.  
ROMERO, Juan C.  
RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz  
SANZ, Ernesto R.  
VERA, Arturo  
VERANI, Pablo

**AUSENTES, CON AVISO:**

RACHED, Emilio A.  
VERNA, Carlos A.

## SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Manifestaciones acerca del sistema de votación y del procedimiento para la sesión.
3. Plan de labor.
4. Asuntos entrados.
5. Beneplácito por decisión del gobierno del Uruguay.
6. Pesar por el fallecimiento de Iván Heyn.
7. Acuerdos.
8. Régimen de trabajo agrario. (O.D. 921/11.)
9. Ley de presupuesto y normas afines. (O.D. N° 915/11, O.D. N° 916/11, O.D. N° 917/11, O.D. N° 918/11 y O.D. N° 919/11.)
10. Modificación de un artículo de la ley de impuesto a las ganancias. (O.D. N° 918/11.)
11. Prórroga del derecho a la exportación de hidrocarburos. (O.D. N° 919/11.)
12. Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.
13. Modificaciones al Código Penal y a la Ley Penal Tributaria. (O.D. N° 924/11, O.D. N° 923/11 y O.D. N° 922/11.)
14. Cuarto intermedio.
15. Apéndice:
  - I. Plan de labor parlamentaria
  - II. Asuntos entrados
  - III. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado
  - IV. Actas de votación
  - V. Inserciones

- *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 y 40 del miércoles 21 de diciembre de 2011:*

**Sr. Presidente.** – Habiendo quórum, queda abierta la sesión extraordinaria.

1

**IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL**

**Sr. Presidente.** – Invito a la señora senadora por Río Negro María José Bongiorno a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.

- *Puestos de pie los presentes, la señora senadora Bongiorno procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)*

2

**MANIFESTACIONES ACERCA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SESIÓN**

**Sr. Presidente.** – El secretario parlamentario va a hacer algunas consideraciones con respecto al sistema de votación.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Queríamos recordar que ha cambiado el sistema, debido a que carecemos de las tarjetas y no ha sido posible reemplazarlas.

Consecuentemente, se vota por banca. Así que cuando se va a proceder a una votación, el senador que se encuentre fuera de su banca debe dirigirse a la misma para votar, porque si vota desde otra banca se va a prestar a confusión y va a aparecer votando otro senador y no él.

Por eso, en el momento de votación, cuando sea votación nominal, tiene que votar cada senador desde su banca.

Recuérdenlo, por favor, porque lo de la tarjeta ha quedado ya fuera de acción, debido a que no ha sido posible reemplazarlas.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: ya que estamos en cuestiones que hacen al procedimiento, si bien ayer no lo conversamos, estamos frente a una agenda realmente muy larga, y hay una costumbre incorporada en el ámbito del Congreso que es que los miembros informantes tengan un tiempo disponible de media hora –siempre es un plazo flexible, por supuesto–, y después, cada senador, diez minutos; los presidentes de bloque también disponen de media hora.

Así que, si estamos de acuerdo sobre este esquema, me gustaría ratificarlo antes de que empiece el tratamiento de los temas.

**Sr. Presidente.** – ¿Algún senador quiere hacer alguna consideración al respecto?

Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – Señor presidente: en la misma línea, estamos de acuerdo con la metodología que siempre se ha implementado.

**Sr. Presidente.** – Seguiremos con los usos y costumbres entonces, senador Pichetto.

3

**PLAN DE LABOR**

**Sr. Presidente.** – Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria que fuese aprobado en la reunión del plenario de ayer.<sup>1</sup>

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

---

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

– *Se practica la votación.*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.<sup>1</sup>

4

**ASUNTOS ENTRADOS**

**Sr. Presidente.** – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.<sup>1</sup>

5

**BENEPLÁCITO POR DECISIÓN DEL GOBIERNO DEL URUGUAY**

**Sr. Presidente.** – Corresponde pasar a sesión ejecutiva de acuerdos.

Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de comisión correspondiente.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: antes de entrar en los acuerdos, hay dos declaraciones que me parece que tendríamos que darles lectura y aprobarlas.

Una tiene que ver con el tema de Malvinas y el rol del Uruguay; hay dos proyectos, uno presentado por el senador Giustiniani y otro por el senador Filmus. Por otra parte hay una declaración manifestando pesar por el fallecimiento en la tarde de ayer de Iván Heyn, el economista que murió en el Uruguay. Así que me gustaría que les diéramos lectura y las aprobemos, para pasar luego al temario concreto.

**Sr. Presidente.** – Si no hay ninguna objeción, pasamos a dar lectura.

**Sr. Secretario** (Estrada). – En primer término vamos a dar lectura al proyecto de declaración acordado en la reunión de labor parlamentaria sobre el tema Malvinas. Dice: la comisión de labor parlamentaria hizo suya la presentación del senador Giustiniani saludando la decisión tomada por el gobierno uruguayo de negar el ingreso a un buque de bandera de las islas Malvinas. A eso se ha añadido un texto del senador Filmus que expresa su satisfacción por la decisión del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, de impedir el ingreso a los puertos de su país de buques que utilicen la bandera de las islas Malvinas. De este modo Uruguay respalda una vez más el histórico reclamo de la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes al Reino Unido. Estas dos declaraciones luego serán fundidas en un solo texto unificado.

**Sr. Presidente.** – En primer lugar se va a votar el tratamiento sobre tablas.

– *Se practica la votación.*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en consideración.

– *Se practica la votación.*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.<sup>1</sup>

6

**PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE IVÁN HEYN**

**Sr. Secretario** (Estrada). – La declaración referida a Iván Heyn propuesta por los senadores Filmus y Pichetto dice que se expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Iván Heyn, joven economista y subsecretario de Comercio Exterior de la Nación. Con su muerte se pierde no sólo a un excelente profesional y político, sino también a un gran compañero y militante

---

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

(...)

8

O.D. 921/11

**REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO**

**Sr. Presidente.** – Continuando con el desarrollo de la sesión pasamos a considerar el orden del día número 921, que contiene el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre régimen de trabajo agrario. Este orden del día tiene una disidencia parcial suscripta por los señores senadores Martínez, Morales y Artaza.

En consideración en general.

Tiene la palabra la senadora Corradi de Beltrán.

**Sr. Cano.** – Previamente, pido la palabra.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Cano.

**Sr. Cano.-** Antes de empezar el tratamiento de este tema quiero poner en conocimiento de este cuerpo la actitud de la Gendarmería Nacional que está cooptando la posibilidad de que dirigentes y trabajadores rurales puedan venir democráticamente a manifestarse a este Congreso, para lo cual se le está impidiendo el acceso por la ruta a la Capital Federal.

Nosotros repudiamos esta situación. No nos parece democrático que quienes tienen afinidad con el gobierno tengan la libertad de acceder sin ningún tipo de condicionamiento y a quienes piensan distinto no se le permita manifestarse democráticamente. Así que quería poner en conocimiento de este cuerpo lo que está ocurriendo en este momento.

---

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

**Sr. Fernández.** – Señor presidente: de la misma manera, quiero dejar constancia de que a comienzos del día de hoy se juntó un grupo de trabajadores, con todo el derecho –como reclama el señor senador Cano–, y por altavoces uno de ellos se pronunció y nosotros recibimos una expresión mafiosa. Dijo que los senadores tengamos cuidado con lo que van a votar, porque saben cuál es el nombre de cada uno de los senadores y conocen la casa de cada uno de nosotros, anunciando que van a ir a nuestras casas a dar cuenta de acuerdo con lo que votemos.

Como tengo la conciencia bien tranquila y muy en claro cuál es el objetivo de este proyecto de ley, que es la defensa de los trabajadores rurales, no va a cambiar mi parecer. Pero sí quiero dejar en claro esta manifestación mafiosa de la que fue objeto, en definitiva, este cuerpo entero.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora Corradi de Beltrán.

**Sra. Corradi de Beltrán.** – Señor presidente: hoy estamos por tratar y acompañar una vez más una iniciativa de nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que va a contribuir a reivindicar y avanzar en la conquista de derechos para sectores que hoy no están incluidos en el sistema, no están bien tratados o han perdido sus derechos, a pesar de que en los años 1944 y 1946 los habían adquirido a través del Estatuto del Peón Rural. Pero en 1980, a través de una ley de la dictadura, del gobierno de facto, que tanto mal le ha hecho a la República Argentina, este sector se ha visto afectado y excluido expresamente de los alcances de la ley de contrato de trabajo.

Nosotros hoy nos vamos a referir a este sector –estoy hablando del trabajador agrario– que como en alguna época de nuestra historia nos ha colocado a la República Argentina como el granero del mundo; por la intensidad de su trabajo, no solamente nos está asegurando la soberanía alimentaria sino que también nos está convirtiendo en un importante proveedor de los alimentos para distintos países del mundo.

Hoy les toca a ellos, al sector agrario, al peón rural y con total convicción quiero decir que nosotros vamos a tratar esta iniciativa y de ninguna manera estaremos afectando u ocasionando perjuicios para ningún actor. Todo lo que figura incluido en este proyecto de ley, en esta media sanción de la Cámara de Diputados, son beneficios para el sector agrario, para los muchos peones rurales de la República Argentina que, en general, trabajan en situaciones infrahumanas.

En este caso, el proyecto consta de 108 artículos más los de forma. Por lo tanto, voy a mencionar lo que considero más relevante y que merece que los senadores conozcan más en profundidad.

Hemos tenido la oportunidad de que contar con la presencia del ministro de Trabajo en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Hoy en este recinto vamos a tener la oportunidad de profundizar aun más en el proyecto.

En primer lugar, con esta ley vamos a posibilitar que los trabajadores rurales tengan su legislación propia, pero en caso de que sea necesario se va a aplicar la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, el trabajador rural a partir de hoy va a tener iguales derechos que los empleados del sector privado más otros derechos, dado que avanzamos en nuevas conquistas a partir de la sanción del proyecto de ley en consideración. No hay inferioridad de condiciones con el resto de los trabajadores del sector privado.

Definimos cuáles son las actividades que va a regular esta ley. Se define la actividad agraria perfectamente bien en el artículo 5°. Se entenderá por actividad agraria toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas

pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes. Establecemos claramente que en ningún caso tiene que haber la intervención de un proceso industrial en tanto se desarrollen en ámbitos rurales.

En otro artículo importante de la iniciativa definimos cuál es el ámbito rural que vamos a considerar para que esta ley alcance a los empleados. En el artículo 6° se establece que el ámbito rural no debe contar con asentamiento edilicio intensivo o la división de manzanas. Pero se hace una salvedad. En el caso de que haya un establecimiento en un lugar no rural, o sea, un lugar urbano, va a estar alcanzado por la aplicación de la ley siempre y cuando en esos establecimientos urbanos se realice la manipulación y almacenamiento de cereales, las que se prestaren en ferias y remates de hacienda y el empaque de frutos y productos agrarios. O sea, se hace la salvedad de las actividades que sí van a estar bajo la órbita de esta legislación, aun no realizándose en el ámbito rural.

En otro artículo establecemos las modalidades de contrato. Es un aspecto muy importante porque también avanzamos sobre una parte del sector que consideramos que es la más numerosa. Actualmente estaba en vigencia, de acuerdo con la aplicación de la ley, dos modalidades de este trabajo. El trabajador permanente, que es el que realiza las actividades en forma continua, y el otro, el trabajador temporario. Con la sanción de esta ley avanzamos e incluimos al trabajador permanente discontinuo, que es realmente el trabajador más común. Es aquel trabajador que realiza actividades, si bien es cierto con un tiempo definido, determinado, pero es contratado nuevamente por el mismo empleador y para realizar las mismas actividades. Se considera –lo ha manifestado el ministro de Trabajo– que este tipo de trabajadores alcanza a más de las dos terceras partes de la totalidad de los empleados en este sector. Por lo tanto, a partir de la sanción del proyecto equiparamos las características del trabajo realizado por este trabajador a la del trabajador permanente, lo cual le va a permitir gozar de beneficios, como antigüedad, licencias, tiempo de preaviso, que son equivalentes a los que tiene el trabajador permanente. Es un tema muy importante.

También expresamente se establecen cuáles son las condiciones en las que tiene que trabajar este trabajador agrario. Perfectamente se establecen las características que debe reunir la vivienda, asegurando la habitabilidad, provisión de agua potable, baño, luz y demás condiciones que hagan a una permanencia digna del trabajador agrario. Hoy, nosotros somos testigos de las situaciones por las que atraviesan estos trabajadores, conocidos como "golondrinas", en diversos lugares del país, quienes generalmente trabajan en situaciones infrahumanas.

Se asegura también el traslado de estos trabajadores desde el lugar donde son contratados hasta el lugar en el que deben realizar sus actividades. En el caso de que el domicilio del empleador esté a más de tres kilómetros del lugar de trabajo, éste deberá garantizarle el traslado al trabajador. Por lo tanto, proporcionarle el traslado al trabajador es una responsabilidad del empleador.

Se fija como un beneficio más la remuneración que deberá percibir el trabajador. Expresamente se establece que no puede ser inferior al salario mínimo, vital y móvil. A pesar de que las remuneraciones son definidas entre las partes a través de un convenio tripartito, se toma como piso el salario mínimo, vital y móvil.

Respecto del período de pago, podrá abonarse por mes, por quincena o por semana. El pago deberá acreditarse en una entidad bancaria pública, y no se considerará válida la remuneración percibida en forma de bono, de mercadería o en especies; tiene que ser exclusivamente en efectivo.

La bonificación por antigüedad es otra conquista. A partir de la sanción de este



proyecto se aumentará la bonificación del uno por ciento –actualmente en vigencia por la Ley de Contrato de Trabajo–, al 1,5 por ciento después de los diez años de antigüedad. Por eso es importante la caracterización de la modalidad de trabajo permanente discontinuo, a la que me referí anteriormente.

Se define la jornada de trabajo y el descanso semanal como derechos del empleado a proteger. La jornada laboral se establece en un máximo de 8 diarias, y en 42 horas semanales. En el caso de que se decida hacer una distribución de la carga diaria, no podrán superarse las 9 horas por día. Asimismo se fijan las condiciones que tendrá que cumplir el empleador para asegurar la higiene y evitarle riesgos al trabajador en el desempeño de sus tareas.

Un título muy importante es el relacionado con las licencias. Las licencias se rigen por la ley 20.744, tal como les había anticipado, pero hay dos incorporaciones novedosas y de avanzada que tienen mucho que ver con la importancia que, desde hace un tiempo, le estamos dando a la familia, con la decisión de contribuir al vínculo familiar. Me refiero a la licencia por maternidad. Aquella trabajadora agraria embarazada podrá gozar de la licencia por maternidad no solamente durante el período de la relación laboral –si ésta es anterior a la fecha de parto–, sino también durante todo el embarazo, hasta la fecha de parto o alumbramiento. Esta es una de las conquistas que anticipé en favor del trabajador. Y con relación a la licencia por paternidad –una medida muy novedosa–, ya el Senado y la Comisión de Trabajo habían avanzado en un proyecto en ese sentido, el cual fue sancionado por este cuerpo y se encuentra en Diputados. Se le da la posibilidad al esposo de la embarazada de acompañar a su mujer y a su hijo, mediante el otorgamiento de una licencia por paternidad de 30 días. Es decir que se incrementa la licencia por paternidad de 3 a 30 días, lo que representa un avance muy importante y una de las nuevas conquistas de los trabajadores agrarios.

Además, se protege el trabajo adolescente y se prohíbe el trabajo infantil. Expresamente queda absolutamente prohibido contratar a menores de edad. Con relación a los adolescentes, se establece una regulación. Los adolescentes de entre 16 y 18 años podrán ser contratados; en ese caso, se requiere la autorización de sus padres. Y si viven de manera independiente, se los considerará autorizados. Pero considerando que el Congreso de la Nación, también mediante una iniciativa de este gobierno nacional, ha declarado obligatoria la educación secundaria, el empleador tendrá la obligación de constatar que el adolescente que está realizando el trabajo laboral cumpla con la asistencia a la escuela y que le dé la garantía de la culminación de la escuela secundaria. O sea que en todo momento el Estado va a estar presente y garante de los derechos y de las leyes que se han venido sancionando a la par de ésta como una manera de fortalecer y comprometeros aún más con estas personas que considerábamos excluidas.

El artículo 10 se refiere al servicio público de empleo. El artículo 65 crea el Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria. Eso también es novedoso y va a estar dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. En este caso, el servicio público de empleo es un servicio que se va a prestar desde esta oficina para la oferta de trabajo temporario. Aquí los empleadores y empleados tienen la obligación de registrarse en este organismo y poder recibir los beneficios de este servicio público de empleo. Justamente, esto profundiza la realidad de los trabajadores temporarios. Es de uso obligatorio para los trabajadores de la actividad agraria.

El siguiente título es el Régimen de Seguridad Social. También es un avance y algo muy parecido a lo que hemos trabajado en la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación. Oportunamente hemos modificado el Régimen de Seguridad Social y hoy estamos con la posibilidad de avanzar en la aprobación de esto. Consideramos que el trabajador o peón rural



realiza actividades muy diferentes a las de cualquier otro trabajador. Trabajan de sol a sol, a la intemperie. Sin lugar a dudas, cuando uno está frente a un trabajador rural cree que tiene más edad de la que seguramente tiene y es, justamente, por la forma de trabajo de sol a sol. En este caso, consideramos un sistema diferencial y reducimos la edad de jubilación de los sesenta y cinco o sesenta, sea hombre o mujer, a cincuenta y siete años de edad y veinticinco años de servicio. Asimismo, en el caso de que el trabajador rural no hubiera realizado esa actividad todo el tiempo, se le permite computar los años de servicio trabajados en otro sector.

Para no desfinanciar al sistema previsional, se estipula en este proyecto de ley el aporte de un 2 por ciento por parte de la patronal para contribuir al sistema previsional y poder garantizar la jubilación a los cincuenta y siete años de edad.

Con respecto a los órganos tripartitos, hay una decisión de seguir manteniéndolos. A la Argentina le ha ido muy bien con esto. En este caso la Comisión Nacional de Trabajo Agrario va a estar constituida por dos integrantes o funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por uno dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por uno del Ministerio de Economía y Finanzas. También está garantizada la representación por dos representantes de los trabajadores y por dos representantes de la parte empleadora. La Presidencia está en manos de uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien va a ser parte garante del cumplimiento de las disposiciones expresas en esta ley.

El organismo de la CNTA va a tener su funcionamiento dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Ministerio va a garantizar un apoyo técnico y administrativo legal a la CNTA, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Esta comisión va a tener como atribuciones dictar su reglamento interno y organizar el funcionamiento de las comisiones asesoras regionales que estarán distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, definiéndose las jurisdicciones y estableciendo y observando las pautas de esta ley, las modalidades del trabajo, las condiciones del trabajo, las actividades cíclicas o estacionales de cada una de las que se desarrollan dentro del trabajo rural.

Las comisiones asesoras regionales estarán formadas o constituidas en igual parte por representantes de los trabajadores y de los empleadores. Dentro de las atribuciones se incluyen las de dictar normas sobre las condiciones mínimas que deben ajustarse a las prestaciones de alimentación y vivienda de los empleados rurales, el cumplimiento de las normas de higiene y de seguridad, el asesoramiento a los organismos nacionales, intervenir en los conflictos cuando las partes por igual –empleador y empleado– así lo consideren y la intervención y la designación de negociadores con idoneidad para asegurar que las soluciones lleguen a puerto. En caso de que no haya cumplimiento de una de las partes se van a emitir resoluciones sumarísimas.

También está prevista la actuación de un tribunal competente que va a sancionar a la parte que no haya cumplido con la aplicación de una multa de un 20 por ciento, que se incrementará en un 10 por ciento en caso que exista mora o en un ciento por ciento cuando haya reincidencia.

Las comisiones asesoras que estarán distribuidas en distintos lugares del país tendrán su funcionamiento en las delegaciones del Ministerio de Trabajo que están ya establecidas en el país. Van a estar formadas por dos representantes del Ministerio de Trabajo, cuatro de la parte trabajadora y cuatro de la parte empleadora. Van a hacer conocer a la Comisión Nacional todas las decisiones o negociaciones a las que se haya arribado. Van a elevar también todos los acuerdos o propuestas formuladas. Y anualmente darán a conocer a la Comisión Nacional el calendario de actividades cíclicas.

Vale decir que la Comisión Nacional de Trabajo conocerá perfectamente lo que ocurra a lo largo del país –cuáles son las necesidades y los problemas– y los trabajos y las políticas que se impulsen estarán perfectamente coordinadas a través de las comisiones asesoras regionales.

En el artículo 7° se crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios –Renatea–, que es el organismo que pasará a reemplazar al Renatre a partir de la vigencia de la ley. Tanto empleadores como empleados estarán obligados a inscribirse en este organismo. Y su personal –que hoy es del Renatre– se registrará por las leyes de contrato de trabajo, por la ley 20.744. Va a mantener la estabilidad laboral el personal que hoy pertenece al Renatre, hablando y siempre refiriéndonos al no jerárquico.

Este organismo estará constituido o integrado para su gobierno y su administración por un director general y un subdirector general, quien lo reemplazará en caso de algún impedimento. El mismo presidente designará síndicos que serán los responsables de la fiscalización y auditoría de los movimientos contables.

Debajo de esto va a existir un Consejo Asesor que estará formado por la parte empleadora, la representación empleadora, la trabajadora y los ministerios de Agricultura, de Economía y de Ciencias. En este caso se define que para ocupar los cargos de director general y subdirector general e integrar el Consejo Asesor se debe cumplir con los requisitos para el empleo público.

La obligación de este registro es expedir la libreta del trabajo agrario, sin cargo, por supuesto, para el trabajador; descentralizar la información y coordinar las acciones necesarias para facilitar la contratación de los trabajadores agrarios; conformar las estadísticas de todas las categorías; proveer la coordinación y cooperación con Nación, provincias y municipios; brindar al trabajador agrario la prestación social; controlar absolutamente todas las partes del cumplimiento de la ley por parte de trabajadores y empleados.

Esto es muy importante. Se instituye el sistema integral de prestaciones por desempleo –que ya está vigente–, pero se crea con carácter obligatorio el seguro por servicios de sepelio para todos los trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley.

En este caso, todos los empleadores deben retener un 1,5 por ciento que será asignado a este fondo con el cual se hará frente a estos beneficios.

Señor presidente: esto es un análisis de los puntos, a mi juicio, más relevantes, o que considero importante que los senadores aquí conozcan o amplíen en sus conocimientos.

Como lo he dicho, estamos frente a un proyecto que avanza en los derechos. Este proyecto, sin lugar a dudas, está impregnado de beneficios para los trabajadores. No se están avasallando los intereses o los beneficios de ninguna persona. Aquí el actor principal es el trabajador agrario. Esta norma está dirigida a que los trabajadores agrarios –como lo he dicho– recuperen los derechos que habían obtenido allá por 1944, a través de Perón, y perdidos por un gobierno de facto. Esta es una más de las leyes que tenemos obligación de modificar. Tenemos que terminar con las situaciones inhumanas con que trabajan nuestros trabajadores agrarios. Tenemos que contribuir a aumentar el registro de trabajadores; a disminuir ese índice de la informalidad.

En este mercado negro laboral, el sector agrario es el que contribuye de mayor manera a la informalidad. Por diversos medios, las distintas provincias somos testigos de cómo se esclaviza en muchos casos a nuestros trabajadores golondrinas.

Esta ley va a garantizar que los trabajadores agrarios sean considerados como cualquier otro trabajador. Se va a custodiar la situación digna en la cual deben desarrollar sus

actividades y vamos a dejar de leer notas en los diarios, o expresiones de algunos trabajadores golondrinas, como un diario que publicaba en mi provincia –el Nuevo Diario–, una expresión de un trabajador golondrina que decía: “No sabíamos cuánto nos iban a pagar. Dormíamos todos juntos en una carpa. No había sanitarios y solíamos recolectar agua en tachos que tenían restos de herbicida, sin recibir ningún tipo de alimentación durante días”.

En cuanto a los trabajadores golondrinas, en mi caso en particular, la provincia de Santiago del Estero es la mayor proveedora de este tipo de trabajadores. Dejan a sus familias, dejan a sus hijos muchas veces con la ilusión de realizar un buen trabajo, de traer una muy buena remuneración para aportarla a su grupo familiar. Las condiciones no son humanas. Nosotros tenemos que modificar estas cosas. Como funcionarios, comprometidos con este gobierno nacional, como gente que está apoyando a las políticas del gobierno nacional, y considerando que este proyecto ha sido enviado al Congreso de la Nación en julio de 2010, que ha tenido la posibilidad de ser tratado antes de que la señora presidenta de la Nación haya sido reelecta, hoy podemos hacerlo. La presidenta ha sido elegida por el pueblo, por el 54 por ciento de los argentinos. Tenemos entendido que los argentinos han apoyado cosas, ideas e iniciativas que la presidenta tuvo en aquella oportunidad.

Hoy nosotros tenemos la posibilidad de avanzar, como lo hicieron los diputados de la Nación, seguramente beneficiando al trabajador agrario.

**Sr. Presidente.** – Muchas gracias, senadora.

Antes de dar comienzo a la lista de oradores, el secretario hará una consideración.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Quería dejar constancia de que cuando se aprobó el orden del día 921 –lo que es el orden del día 921–, la comisión tuvo en cuenta el expediente venido de la Cámara de Diputados C.D. 89/11 y también el C.D. 91/11, que es el de la fe de erratas, que fue considerado por la comisión e incorporado. Porque ahora, el texto de la ley está de acuerdo con las correcciones que hacía la fe de erratas que oportunamente remitió la Cámara de Diputados.

Quería que esto quedara claro para que no nos olvidemos de que hubo una modificación de ese tipo.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Para clarificar, el texto con la fe de erratas que cambia es “Renatre” por “Renatea”.

Señor presidente, voy a pedir que se cierre la lista de oradores. En la mesa obra un listado; entonces, si hay algún senador que quiera incorporarse a esa lista, lo incorporamos y procedemos al cierre y a establecer un horario estimado para votar.

**Sr. Presidente.** – En consecuencia, si están de acuerdo, voy a dar lectura de la lista de oradores para darla por cerrada. Senador Martínez, senadora Negre de Alonso, senadora Di Perna, senadora Escudero, senador Cano, senador López, senadora Higonet, senador Romero, senador Linares, senador Rodríguez Saá, senador Morales y senador Pichetto.

**Sr. Giustiniani.** – Pido que se agregue al senador Juez.

**Sr. Presente.** – Se agrega el senador Juez, entonces.

Se pone en consideración la lista de oradores.

– *Se practica la votación*

**Sr. Presidente.** – Queda aprobada y cerrada la lista de oradores.

A continuación, ponemos en consideración la habilitación sobre tablas del proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación.*

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado.

Tiene la palabra el senador Martínez.

**Sr. Martínez.** – Señor presidente: cuando tratamos este tema en comisión, ocasión en la que estuvo presente el señor ministro de Trabajo, manifestamos que en el bloque íbamos a tomar la definición de cómo íbamos a acompañar este dictamen y así lo hicimos. Lo hacemos con disidencia parcial, y eso fue anexado en forma posterior, independientemente de cuán rápido esto había sido enviado a las distintas comisiones para que tuviera el tratamiento parlamentario que correspondía. Nosotros cumplimos; lo que dijimos que íbamos a hacer fue lo que hicimos.

Con respecto al dictamen de mayoría, que es lo que estamos tratando hoy aquí, coincidimos con muchas cuestiones que tienen que ver con las disposiciones generales. Es decir, con las fuentes de regulación que por la presente ley y las normas que en consecuencia se dictan; con la Ley de Contrato de Trabajo, la ley 20.744; con los convenios y acuerdos colectivos celebrados de conformidad con lo previsto en las distintas leyes, y con la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es un punto al que se referirá específicamente el senador Morales en el cierre. Nosotros no compartimos la disolución del Renatre, sino que incorporamos una propuesta sobre esos artículos. Coincidimos también con este dictamen por la voluntad de las partes y por los usos y costumbres.

Cuando hablamos de lo que son las actividades incluidas, creemos que es un buen paso, pero nos parece que quedan excluidas varias cuestiones que, en su momento, nosotros habíamos charlado sobre otro tipo de actividades que se dan dentro del ámbito agropecuario. Creo que esta es una tarea pendiente y ojalá que podamos seguir avanzando el próximo año desde la Comisión como para poder trabajar en eso. Creemos también que es muy importante que sea de orden público, porque, a veces, parece que estas cuestiones son nimiedades, pero cuando luego hay que ir a resolver litigiosidad, nos damos cuenta de que estas cuestiones son realmente importantes.

Nosotros tuvimos algunas diferencias con el ministro de Trabajo, porque él decía que, por allí, era un exceso lo que había hecho la Cámara de Diputados al trasladar muchas cuestiones de la Ley de Contrato de Trabajo en esta ley. A nosotros nos parece que no es así. Creemos que es una buena técnica que esté todo bien redactado y bien escrito. Además, en algunas oportunidades, en otras leyes, esto lo hemos charlado y hemos concordado, como, por ejemplo, en el tema de la UOCRA y de algunas otras más, donde realmente se llegó a un acuerdo. Lo importante es que estén las cosas.

En cuanto a lo que es contratación y subcontratación, empresas subordinadas y/o relacionadas y a la solidaridad que ellas deben tener, nos parece que es muy importante. Estamos de acuerdo con el tema de las cooperativas de trabajo, ya que el mecanismo de contralor tiene que estar dado no solamente por el ente de control de cooperativas sino también por Policía del Trabajo, que tiene que llevar adelante los controles.

En el artículo 15, cuando se habla de empresas de servicios para la provisión de trabajadores temporarios, se establece la prohibición de que puedan hacerlo. Todos sabemos que existen algunos vericuetos. Esto se lo decía al ministro, quien asentía, dado que estas mismas empresas, a veces buscando por otro lado otro tipo de constituciones societarias, avanzan en este sentido. Y no nos parecería mal discutir esto, aunque creo que no nos van a dar la oportunidad de modificarlo; pero creo que sería otro de los puntos a tener en cuenta.

Hoy, las empresas de trabajadores temporarios están registrando aproximadamente unas 300 o 400 mil personas, que están en blanco. Esto es lo bueno que tiene este mecanismo de servicio. A tal punto son efectivas que, independientemente de otro tipo de actividades, por ejemplo, en el control del último proceso electoral, estas empresas aportaron al Ministerio

de Interior y al Correo más de 32 o 36 mil personas para que lleve adelante esa actividad. Y estas personas están registradas y es trabajo en blanco. Creo que es un punto pendiente y deberíamos dejarlo, presuponiendo mal, quizás, que no nos permitan hacer alguna modificación.

Nos parece realmente muy importante la aparición de esta figura del trabajador permanente discontinuo. Es algo que no existía y, realmente, es muy importante porque, de alguna manera, va a permitir el blanqueo de esta gente.

También se incluye el trabajo de equipos de cuadrilla y la prohibición concreta del trabajo infantil. En esto hemos trabajado mucho. Hay muchos proyectos presentados. La OIT siempre nos ha tenido en cuenta y nos exige un poquito más ahora. Y fuimos avanzando, de los 14 a los 15 y a los 16 años. Hoy, por debajo de los 16 años está prohibido el trabajo, lo que me parece excelente.

Aparte, por las características peculiares del trabajo rural, se debe considerar el tema del trabajo adolescente y el trabajo dentro de una familia, cuando hay alguien entre los 14 y los 16 años. Si bien hay que tender a que esto no ocurra, es lo que sucede, y me parece muy bien que esté reglamentado, que la carga horaria no sea mayor de las tres horas, que tengan que ir al colegio.

Ese tipo de situaciones, en casos particulares, me parece bien que estén contempladas. Ni qué decir de lo que son los requisitos de la vivienda, la alimentación, el agua potable, el tema de los traslados. En ese tipo de cosas... Las remuneraciones mínimas, cómo deben establecerse. El tema del trabajo a destajo, que también está contemplado, aunque no con esa denominación pero sí está contemplado cómo tiene que trabajarse; los períodos de pago; los lugares de pago; la prohibición de los vales, mercadería, etcétera, como forma de pago; el tema de las jornadas, cómo se establecen; el descanso semanal; el tema de seguridad. Cuando hablamos del tema de seguridad, nosotros tenemos un artículo; veríamos la posibilidad de incorporarlo, dado que consideramos que es muy importante.

Y cuando se habla de sustancias tóxicas en el proyecto que tenemos en consideración, de lo único que trata es de la deposición de los envases. Habla específicamente, y en eso estamos de acuerdo, pero también entendemos que deberían incorporarse las obligaciones del empleador cuando se utilicen agroquímicos. Hemos visto varias denuncias sobre el tema.

Lo que tendríamos que agregar –hay un texto que voy a acercar luego a Secretaría– es la obligación de informar y capacitar a los trabajadores que realicen tareas en el establecimiento, con respecto al uso adecuado y los riesgos que implican las sustancias químicas y biológicas; informar y capacitar a los trabajadores en la gestión integral de los productos químicos y biológicos; colocar carteles y señales de seguridad que hagan saber a los trabajadores en qué lugares de la explotación agropecuaria, invernaderos y demás han sido utilizados estos productos, y cuál es el máximo de tiempo que se puede permanecer en estos lugares, como asimismo cuánto se debe esperar antes de volver a ingresar; utilizar sustancias químicas y biológicas registradas y autorizadas para su uso de acuerdo con las normas emanadas de los organismos competentes; proveer a los trabajadores aplicadores del equipo de seguridad aprobado por los organismos competentes, y proveer, sin cargo, al trabajador, de los elementos de seguridad y protección personal homologados por las autoridades nacionales para cada situación y tarea que corresponda. Creo que éste es un elemento importante que podríamos estar incorporando a esta legislación. Y, repito, estamos de acuerdo, también, con el artículo 48. Sería un artículo 48 bis, o un agregado.

Cuando hablamos de las licencias, como había explicado la presidenta de la comisión, se avanza en la licencia parental. Realmente, esto nos alegra mucho. Nos hubiera alegrado



mucho más que se hubiera incorporado el tema de la licencia, al que este Senado dio sanción y que está en Diputados, durmiendo el sueño de los ángeles, en el que se establecía no solo la licencia parental sino que se avanzaba, también, en modalidades de licencia por maternidad, etcétera. No es que no estemos de acuerdo, lo que estamos pidiendo es, en definitiva, que se incorpore la licencia parental a toda la legislación que tenga que ver con esto y no solamente para el caso de la gente que trabaja en el sector agropecuario.

El trabajo adolescente, como había dicho antes, los certificados de escolaridad y aptitud física. Y la regulación del trabajo nocturno, que es muy importante en la actividad agropecuaria. Se establece asimismo con mucha claridad la prohibición absoluta de que sean menores los que lleven adelante este tipo de actividades.

La prevención del trabajo infantil y espacios de contención también se contempla; hay una experiencia que se ha hecho en la provincia de Mendoza, donde existe la posibilidad de que aquellas familias que van a hacer la recolección tengan un lugar donde dejar a sus hijos menores, tipo jardines, para que puedan ser contenidos en la jornada laboral que los padres llevan adelante. Con respecto a la capacitación, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con lo que es la responsabilidad que tiene el Estado.

Cuando llegamos al artículo 90, nos parece muy bien que exista siempre más de una instancia para resolver los conflictos, en un tribunal de conciliación. Lo que no estamos de acuerdo para nada es con el artículo 91, donde se aplica un criterio de proceso sumarísimo.

Dice así, lo voy a leer textualmente: “Cuando alguna de las partes, presentare una conducta que no se ajuste a los deberes y obligaciones establecidos en el artículo precedente, se considerará que la misma ha vulnerado el principio de la buena fe negocial [Yo pregunto cómo se determina la buena o mala fe, es bastante complejo], quedando la parte afectada por el incumplimiento habilitada a promover acción judicial ante el tribunal laboral competente, mediante el proceso sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...”.

Después sigue diciendo: “El tribunal competente dispondrá el cese inmediato del comportamiento violatorio del deber de negociar de buena fe y podrá, además, sancionar a la parte incumplidora con una multa de hasta un máximo equivalente al 20 por ciento (20%) del total de la masa salarial del mes que se produzca el hecho, correspondiente a los trabajadores comprendidos en el ámbito personal de las negociación. Si la parte infractora mantuviera su actitud, el importe de la sanción se incrementará en un diez por ciento (10 %) por cada cinco (5) días de mora en acatar la decisión judicial. En el supuesto de reincidencia, el máximo previsto en el presente inciso podrá elevarse hasta el cien por ciento (100 %) de esos montos. Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de partes, podrá también aplicar lo dispuesto en el 666 bis del Código Civil”.

Nosotros entendemos que en una cuestión de estas características se deberían llevar adelante mecanismos para ver cómo se resuelven los conflictos; debería ser una cuestión de tipo general, es decir, no solamente aplicable a una actividad concreta. Y segundo, nos parece que, de alguna manera, esto es un proceso inverso al que había manifestado la señora presidenta; nosotros compartimos que existe la libertad de huelga pero que no debe haber derecho de extorsión. Yo creo que esto es una extorsión en el otro sentido, es decir, estamos diciéndole a la gente que trabaja dentro del sector rural que, en caso de que lleven adelante algún mecanismo donde pueda ser considerado que se violó la buena fe negocial, van a ser sancionados con estas características. Independientemente que ya existen mecanismos, como pueden ser el descuento de los días trabajados, la suspensión o la eliminación definitiva de lo que es la personería gremial; son, hoy, elementos que tiene el Ministerio de Trabajo para

avanzar en los mecanismos de discusión con las distintas manifestaciones que puede tener el movimiento obrero.

Nosotros acompañamos en su momento al presidente Néstor Kirchner cuando se lo criticaba por no avanzar en la judicialización de lo que eran los conflictos sociales. Yo creo que deberíamos seguir en el mismo camino y no avanzar en la judicialización de lo que pueden ser los conflictos laborales. Comparto lo que decía, inclusive, el señor ministro el otro día cuando tuvimos la reunión de comisión, en el sentido de que la litigiosidad es parte del crecimiento, la litigiosidad es parte del camino que debemos ir recorriendo como sociedades; lo que debemos buscar son los elementos, los lugares, para poder ir resolviendo los conflictos. Por eso, reitero, el artículo 90 nos parece un muy buen aporte en el sentido de que existan mecanismos y un tribunal en el cual puedan ir dirimiéndose los conflictos, pero no estamos en absoluto de acuerdo con la aplicación del artículo 91.

Con respecto a la autoridad de aplicación, por supuesto que debe ser en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo en todo este tipo situaciones, independientemente de que sabemos que el poder de policía está delegado en acuerdos con las provincias para que avancen debidamente. Además, deberíamos ayudar y capacitar a cada una de las delegaciones para que lleven adelante el control, más allá de saber que el control en el área rural es complejo.

Cuando se indica que en lo que no se halla especificado se remite a la ley de contrato de trabajo, desde ya que así es pues se trata de la norma supletoria para estos casos. No obstante, al analizar el artículo 100 advertimos que dice: “Ley de Contrato de Trabajo. Su aplicación. Las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias en cuanto se refiera a aspectos de la relación laboral contemplados en la presente Ley, conforme lo establecido en el artículo 2°”. Y el artículo 2° de la norma establece ese mismo tipo de cosas. En consecuencia, sostenemos que el artículo 100 debería decir: “Ley de Contrato de Trabajo. Su aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público”, ya que el siguiente párrafo entra en contradicción con lo que establece el artículo 2° del proyecto.

En la reunión de comisión, el señor ministro había dicho que no había que trasladar demasiadas cuestiones. Sin embargo, como algunas se trasladan y otras no, pensamos que, para que todo sea más claro, debería eliminarse el segundo párrafo del artículo 100.

Finalmente, quiero dejar sentado que, en lo que se refiere al mantenimiento del Renatre –sobre todo, porque en las reuniones de la OIT siempre fue un mecanismo importante y saludable para llevarlo adelante–, proponemos que exista una inclusión más fuerte del Estado –no solamente una auditoría–, aunque sin que se llegue al desguace de la institución. No obstante, esta última observación va a ser explicada en detalle por parte del señor senador Morales.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: indudablemente, se aborda una temática que resulta fundamental en la actividad económica de la República Argentina. Se trata de una actividad dinamizadora, y el trabajador agrario es uno de sus protagonistas fundamentales. Siempre fue algo importante en nuestro país.

Fíjese que lo primero de lo que se ocuparon los primeros gobiernos patrios fue de eliminar las leyes de Indias, que habían tomado instituciones del régimen incaico y legislado sobre la mita y el yanaconazgo. Es decir que, sin dudas, se trata de una actividad que fue regulada desde el nacimiento de la República Argentina. Dice la historia que los primeros gobiernos patrios tenían dos objetivos fundamentales: atender las necesidades de la guerra de



la independencia y afincar a los trabajadores en sus tierras.

Posteriormente, en la República Argentina comenzaron a dictarse los códigos rurales. La primera provincia en dictarlo fue Buenos Aires en 1865; luego, siguieron Santa Fe en 1867, Corrientes en 1871, Entre Ríos en 1873, Catamarca en 1878 y Mendoza en 1880. A ello, siguieron lo que se llamaban las leyes de estancia. Pero estas normas no sufrieron ninguna clase de modificación con la sanción del Código Civil porque, como se sabe, este ordenamiento abordó tangencialmente la problemática del trabajador rural. Y siempre se abordó en la historia argentina, hasta 1948, en forma tangencial porque, en realidad, la legislación estaba dirigida al proceso industrial.

Por ejemplo, la ley 9.688, de accidentes de trabajo –que hemos estado aplicando hasta hace muy poco tiempo– es de 1915, se refería a los accidentes industriales y establecía que, en lo que fuere atinente, se podía aplicar al trabajador rural. Luego, en 1941 se ratificó la Convención número 12 de la OIT en cuanto a otorgar los beneficios de las indemnizaciones por accidentes a los trabajadores agrarios, y lo mismo cabe señalar con respecto a la protección de las mujeres y los niños, a través de la ley 11.317.

Sin embargo, en 1947 se creó, por primera vez, la Comisión Nacional de Trabajo Rural, que dependía de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Y posteriormente, en 1948, se dictó el decreto ley 28.169, que sancionó el Estatuto del Peón Rural. ¿Por qué digo esto? Porque, en realidad, he leído y escuchado en muchos lados que recién ahora la República Argentina se está ocupando de los trabajadores agrarios y, en realidad, fue el general Perón quien se ocupó por primera vez de ellos, aunque pareciera que lo estamos olvidando.

En tal sentido, estuve releendo y me di cuenta de que, en realidad, en aquella norma se consignaban los horarios de trabajo, la obligación de la vivienda y de la dignidad del trabajador agrario, etcétera. O sea que la protección del trabajador agrario no se inició en el siglo XXI, sino que fue el general Perón quien la legisló y consolidó durante el siglo XX, concretamente, allá por 1948. Ahora bien, posteriormente, se dictó la ley de la dictadura 22.248, que estableció un régimen nacional de trabajo agrario. En el proyecto que estamos tratando hoy, hay algunas remisiones a diversos institutos de esa ley.

Pero no quiero dejar de mencionar el trabajo de este Congreso en 1999, cuando sancionó la ley 25.191, que crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, ente autárquico de derecho público no estatal con una dirección y administración colegiada. Dicha ley prevé un aporte patronal del 1,5 por ciento y establece determinadas obligaciones, como la inscripción obligatoria de los trabajadores y de los empleadores en el Renatre; la obligatoriedad de otorgar al trabajador rural la libreta –por parte del Renatre–; y, además, se establece algo fundamental. Es decir, el sistema del trabajo rural aportaba a la ley 25.013, que es la ley de empleo, y sin embargo, la normativa referida a la ley de empleo no era aplicable al trabajador rural cuando este estaba desempleado. O sea, esa ley –que brindó cobertura a distintos sectores de trabajadores– no cubría la situación, porque el fondo de desempleo no estaba destinado a los trabajadores rurales.

Esto es lo que el legislador de 1999, desde este Congreso, remedió, otorgándole la posibilidad de tener un seguro de desempleo, que es distinto –como bien decía la miembro informante– según se trate de trabajadores permanentes o no permanentes. Y además, de acuerdo con la cotización de los últimos tres años de trabajo, dicho seguro de desempleo podía llegar desde un mínimo de cuatro meses hasta un máximo de doce. O sea que esa ley de 1999, que es una ley de la democracia, vino a dar una verdadera protección y a solucionar una grave situación de injusticia respecto de los trabajadores rurales. Pero, además, fijó el mojón para abrir el camino de lo que hoy llamamos “el cese de la informalidad” y la incorporación

de quienes llamábamos en ese momento más que ahora “trabajadores en negro”, porque ahora los llamamos “informales”, término que hemos incluido en varios de los textos de ley que hemos trabajado en este Congreso.

¿Qué es lo que ocurre con este proyecto que hoy estamos analizando, señor presidente? Efectivamente, la señora presidenta de la comisión y miembro informante dijo que el proyecto había ingresado a la Cámara de Diputados en 2010; si mal no recuerdo, en agosto. En realidad, en el Senado, tiene un ingreso reciente. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: si en la Cámara de Diputados había un proyecto que había sido presentado por los trabajadores, o sea por los sujetos protagonistas y, además, pasivos de la legislación protectoria a la que aspiramos dictar, ¿por qué motivo se margina el proyecto que presentan ellos y se avanza en uno que, a nuestro criterio, no los beneficia en determinados sectores, fundamentalmente, en relación a la asociación de los trabajadores y a su defensa desde los organismos naturales, como lo son los sindicatos?

Fíjese, señor presidente, que indudablemente este proyecto rompe la unidad gremial de los trabajadores agrarios, porque divide la actividad de tal modo que desguaza el sistema sindical de la UATRE, que es la que representa al trabajador agrario. Esto lo debemos decir; porque así como el proyecto tiene artículos importantes –tal como ha referenciado la presidenta de la comisión y miembro informante de la mayoría–, también debemos decir que el sistema de parcialización de los trabajadores es un sistema de ingeniería armado para romper la unidad estructural de los sindicatos argentinos, lo cual va en contra de lo que el propio general Perón dijo –y subrayó–, en cuanto a que había que consolidarlos para la defensa de los trabajadores argentinos.

El artículo 3°, con el que estamos absolutamente en contra y pretendemos que pueda ser modificado en esta reunión, establece que no se va a aplicar el régimen al personal que desarrolle tareas en empresas o establecimientos mixtos agrarios industriales o agrarios comerciales y, posteriormente, agrega –si no recuerdo mal, en el artículo 5°– que tampoco si el producto sobre el cual el trabajador dedica su fuerza de trabajo va a formar parte de una cadena industrial.

Entonces, yo pensaba qué sucede con los trabajadores que trabajan en establecimientos dedicados al cultivo de arándanos, hoy un producto que se comercializa muy bien a nivel internacional y al que, además, la República Argentina le da valor agregado porque, en su gran mayoría, no exporta el fruto propiamente dicho sino procesado, industrializado. Esos trabajadores de los arándanos –por citar un ejemplo, porque habrá diez mil más– no podrán ser incorporados en este proyecto de ley, que es un proyecto específico para ello.

Tampoco va a incluir al trabajador ocupado en tareas de cosecha o a aquellos que trabajan en el parque de frutas. Hay algunas sustancias como, por ejemplo, el arándano, que dicen que da juventud...

**Sr. Presidente.** – El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?

**Sra. Negre de Alonso.** – Sí, cómo no.

**Sr. Pichetto.** – Me parece, señora senadora, que la exclusión se da en función de una mayor jerarquización, atento a que el proceso primario entra ya en un esquema de industrialización. Indudablemente, el salario del trabajador industrial ya tiene otra jerarquía y otra remuneración, por lo que resulta coherente que no esté incluido dentro de los alcances de la ley del trabajador agrario porque, en ese caso, estaríamos hablando de una actividad de carácter industrial. Tal vez, no la entendí bien.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – Yo estaba dando el ejemplo del arándano. En ese caso, como el fruto va a formar parte de un proceso de industrialización, quienes trabajan en los campos de siembra de arándanos quedan excluidos de esta ley...

**Sr. Pichetto.** – No.

**Sra. Negre de Alonso.** – Sí, porque habla de que el producto no forme parte de ningún proceso de industrialización. Así lo entiendo yo; supongo que, después, me irá a contestar la miembro informante, que no abordó esta temática.

**Sr. Pichetto.** – Me parece que no es así.

**Sr. Presidente.** – Por favor, señores senadores, les pido que no dialoguen entre sí y se dirijan a la Presidencia.

**Sra. Negre de Alonso.** – Yo le había concedido una interrupción al señor senador Pichetto y no sé si terminó de hablar.

**Sr. Pichetto.** – Me parece que, indudablemente, el trabajador primario está encuadrado dentro de lo que es el régimen agrario. Ahora bien, aquí no estamos hablando de los trabajadores que participan del proceso de industrialización, y es importante que eso ocurra en la Argentina porque genera empleo y agrega valor al producto primario. Indudablemente, el trabajador que participa del proceso industrial del producto primario está en otro encuadramiento. Eso es lo que determina la exclusión y esa es la intención del legislador.

**Sra. Negre de Alonso.** – Ojalá que sea esa la intención del legislador; a mí me alegraría...

**Sr. Presidente.** – Disculpeme, señora senadora, pero la senadora Corradi de Beltrán le está solicitando una interrupción.

**Sra. Negre de Alonso.** – Sí.

**Sra. Corradi de Beltrán.** – Es para manifestar que el artículo 5° es muy claro al respecto, porque define a la actividad agraria como toda aquella dirigida a la obtención de productos primarios, siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial.

Si aplicamos un criterio similar al de los arándanos, podríamos decir, con respecto al algodón, que aquellos trabajadores que se dedican a la fabricación de las telas estarían bajo la aplicación de este proyecto de ley. O sea que este proyecto de ley sería aplicable para los trabajadores siempre que no se incluya a cualquier actividad industrial.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – Tengo absolutamente en claro que quienes trabajan en Arcor, en Bagley o en otras fábricas nacionales y en los laboratorios que procesan el arándano para la eterna juventud están bajo otra ley y encuadrados en otro tipo de convenio. Lo que estoy diciendo es que el artículo no es lo suficientemente claro para establecer que esta ley es aplicable para las personas que trabajan en una determinada actividad y no para aquellos que trabajan en el proceso de industrialización del producto primario de esa misma actividad. No hay garantías en ese sentido y no creo que esté claro. Me parece que podría quedar más especificado.

Fíjense que yo leí la versión taquigráfica del debate en la Cámara Baja y no advertí que los diputados que hicieron uso de la palabra brindaran explicaciones o hablaran sobre este tema, cuando todos sabemos que es esto lo que está en debate en nuestro país alrededor de esta norma. Tampoco están comprendidos, por ejemplo, los trabajadores abocados a tareas de cosecha o aquellos que empacan frutos.

Con respecto al proceso industrial, si estamos hablando de las nuevas tecnologías –la presidenta de la Comisión lo mencionó–, como no está claro con relación al sujeto pasivo de este proyecto de ley quiénes quedan incluidos y quienes no, o si queremos decirlo de otra forma, cuáles son los sujetos activos, trabajadores agrarios, que van a quedar involucrados en

este proyecto, yo me pregunto qué pasa si, a raíz de la aplicación de modernas tecnologías en la producción agropecuaria, consideramos que se trata de una actividad industrial y, consecuentemente, queda excluido el trabajador. ¿Qué pasa con el trabajador que está en el predio afectado a siembra volante, al uso de elementos para las plagas? ¿Qué pasa con el trabajador que pone a disposición su fuerza de trabajo en los campos donde hay riego por goteo? Porque, en este caso, hay un proceso tecnológico y de industrialización muy avanzado que, además, parte de pozo o parte de acueductos. ¿Cómo considero al acueducto? ¿Considero que es un proceso de industrialización dentro del predio?

Además, hay otro elemento importante que tampoco comentó la señora presidenta de la Comisión, y es que excluye el territorio fijado por los intendentes. Entonces, respecto de lo que es natural hoy para todo tipo de relación jurídica respecto a lo que se define como territorio urbano o no urbano –me acojo o no a determinada reglamentación–, esta ley dice expresamente que no se aplican ni se tienen en cuenta los criterios comunales respecto de la división entre urbano y rural. Dice expresamente la ley que se prescindirá de la calificación que efectuaré la respectiva autoridad comunal. Se está utilizando un criterio demográfico e inmobiliario y no un criterio que tiene que ver con la actividad.

¿Quiénes quedarán excluidos? Quedarán excluidos todos los trabajadores de procesos productivos y relacionados con incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo, la micro propagación de semillas, la actividad frutihortícola, la manipulación de cereales, la avicultura, las producciones no tradicionales. Ninguna de esas producciones podrá acogerse a los beneficios de esta ley.

Con relación a la remisión que se hace a la Ley de Contrato de Trabajo –de la que acá se ha hablado–, también tengo algunas cuestiones que señalar. Se excluye el principio *in dubio pro operario*; no se incorpora en la legislación específica. En cuanto al contrato de trabajo agrario, el proyecto que estamos analizando es mucho más restrictivo que el anterior. Deja afuera las tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria.

Cuando hablo del sujeto pasivo de la ley, no es una cuestión de mala interpretación del artículo 3° sino que, además, hemos soslayado el involucramiento de aquellos sujetos que tuvieron una relación principal o accesoria con la actividad agraria que hasta ahora estaban incluido y protegidos por este régimen.

Otro aspecto más: observen que la Ley de Contrato de Trabajo establece la solidaridad laboral. En ese sentido, todos conocemos perfectamente –tanto los que somos abogados como los que no lo son– que la solidaridad laboral es una gran conquista. Sin embargo, en relación con el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, este proyecto limita la responsabilidad solidaria.

Además, se elimina el período de prueba. No existe período de prueba para el trabajador agrario, a pesar de que está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que no se trata de una remisión directa a la Ley de Contrato de Trabajo sino que varios derechos de dicha norma fueron restringidos. Sin embargo, debemos reconocer que se efectuaron una serie de incorporaciones importantes al proyecto respecto de los derechos de los trabajadores.

**Sr. Pichetto.** – ¿Me permite una interrupción, señora senadora Negre de Alonso?

**Sra. Negre de Alonso.** – Sí, cómo no.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: en realidad, en la única actividad en que se exige el período de prueba es en la agrícola. Por lo tanto, la eliminación del período de prueba es un logro de la norma que estamos debatiendo. Hay que tener en cuenta –reitero– que el período de prueba

no lo tiene ninguna otra actividad laboral, que solamente se le exige al trabajador agrario. ¿Qué significa el período de prueba? Por ejemplo, que si al empleador no le gusta la cara del trabajador o si considera que lo saludó mal, lo echa dentro del período de prueba sin ningún derecho a indemnización.

Entonces, la eliminación del período de prueba no es un elemento negativo, contrariamente a lo que expresó recién la senadora Negre de Alonso, sino un aspecto altamente positivo, ya que iguala al trabajador agrario con el resto de los trabajadores de la ley 20.744.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: la ley 20.744 fija el período de prueba. Es más, algunos convenios colectivos establecen indemnizaciones dentro del período de prueba, por encima de la ley 20.744. Después de 2002. se comenzó a negociar eso. Otra cuestión...

**Sr. Guinle.** – ¿Me permite una interrupción, señora senadora Negre de Alonso?

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.

**Sr. Guinle.** – Señor presidente...

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: todavía no le concedí la interrupción al senador Guinle. De todas formas, se la concedo, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.

**Sr. Guinle.** – Señor presidente: escuché algunos errores que estimo muy gruesos, tales como, por ejemplo, que el régimen en consideración no tiene la regla *in dubio pro operario*, cuando se trata de un principio propio de la legislación laboral vigente. Debemos tener en cuenta que ese principio se introduce en este proyecto a través de la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, la iniciativa en tratamiento incluye no sólo el *in dubio pro operario* sino también las reglas de la norma más favorable, de la condición más beneficiosa, de la indemnidad, de la irrenunciabilidad, etcétera. Es decir, una serie de principios que uno ve en el ámbito de la progresividad de nuestra Constitución y que el proyecto adopta.

Respecto de lo expresado por la senadora en cuanto a la eliminación del principio de solidaridad, en realidad, el artículo 12 regula la contratación, subcontratación y cesión, en coincidencia con la Ley de Contrato de Trabajo. Además, se establece la responsabilidad solidaria en las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción. Y es aun más amplia en su aplicación que la Ley de Contrato de Trabajo, al contemplar no solo las tareas principales sino también las accesorias. Esta interpretación amplia no ha sido receptada todavía por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero sí por varios proyectos de ley que se encuentran en esta Cámara.

Algunas de las afirmaciones de la senadora Negre de Alonso –al parecer, dichas a "las corridas"–, si no se las confronta, podrían ser consideradas como verdaderas; pero no son ciertas. Ninguno de los conceptos que se afirmaron como verdades absolutas es cierto y todos se contradicen absolutamente con el propio texto del proyecto.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: el artículo tiene una limitación. Entonces, lo que está diciendo el senador es la primera parte; lo que estoy diciendo yo es la segunda parte, que tiene una limitación y una remisión.

En cuanto al principio *in dubio pro operario*, presidente, fíjese que hay una remisión a la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que su aplicación sea compatible y no se oponga al régimen jurídico específico.

Consecuentemente, lo que debe incorporarse –lo que estamos pidiendo– es que, frente a la compatibilidad, deba establecerse que, ante la duda, se aplique la ley más favorable a la



situación concreta de ese trabajador, no sólo con la compatibilidad.

– *Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del H. Senado, senadora Beatriz Rojkes de Alperovich.*

**Sr. Guinle.** – ¿Pone en duda que es así, senadora?

**Sra. Negre de Alonso.** – Hablamos de compatibilidad, señor senador. Por supuesto que tengo dudas. Si no, no lo hubiera dicho.

El artículo 12 establece que no les resultará de aplicación el presente artículo a aquellos propietarios que den en arrendamiento tierras de su titularidad que no constituyan establecimientos o explotaciones productivas en los términos del artículo 5° de esta ley. Entonces, no se aplica la solidaridad. Ahora, que la gente alquila hasta los patios...

– *Manifestaciones fuera de micrófono del señor senador Guinle.*

**Sra. Negre de Alonso.** – Le pido al señor senador que me deje terminar. No le doy más interrupciones. Señora presidenta: le pido que ponga orden en la sesión. Estoy haciendo uso de la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Continúe, senadora.

**Sra. Negre de Alonso.** – Entonces, el artículo 12, en su última parte, tiene una restricción; lo acabo de leer.

Otra cuestión que no contempla y sí contemplaba el régimen anterior es el plazo de pago. Entonces, acá, nuevamente, me podrán decir que nos estamos remitiendo a la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto sea compatible pero, en realidad, el Estatuto contemplaba un plazo de pago, para estos trabajadores, menor al de la Ley de Contrato de Trabajo, que era de cuatro días. Esto no está incorporado en este proyecto. Sí tiene importantes incorporaciones, como dijo la miembro informante, respecto de la igualdad en las condiciones de trabajo, respecto de la licencia; y el descanso semanal es mayor. También, tiene reenvíos con respecto a licencia y, por supuesto, con respecto a la prohibición del trabajo infantil y trabajo adolescente, que se corresponden con la ley 26.390, que nosotros votamos en el Senado. Pero también estamos afectando ese fondo de desempleo que era al que yo me refería, el que estableció el legislador de 1999.

Fíjense ustedes que si nosotros vamos al sistema general, si hacemos una comparación de lo que hoy estamos estableciendo en el sistema de desempleo en virtud del Renatre, si aplicáramos la diferencia al sistema de la ANSeS, habría una diferencia porcentual, en el mínimo, de un 60 por ciento más y, en el máximo, de un ciento por ciento más. Entonces, económicamente, es una verdadera afectación de algo que había sido un logro de 1999. ¿Por qué este sistema de desempleo...?

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Perdón, senadora, vaya redondeando que se terminó su tiempo. Hay muchos oradores.

**Sra. Escudero.** – Se lo consumieron con las interrupciones.

**Sra. Negre de Alonso.** – Voy redondeando, no hay problema.

Entonces, ese que fue un logro, una conquista de ellos a través de este Congreso, hoy está reducido ampliamente.

Señora presidenta: quiero mencionar una cuestión más allá de que, como dijimos, este proyecto tiene importantes avances. Vamos a plantear la modificación de esos dos o tres artículos, así como que se mantenga este sistema tripartito con el aporte y la decisión por parte de los trabajadores. Pero quiero decir dos o tres cosas.

Acá se habló de los trabajadores golondrina. En parte lo respondió el senador Martínez. De hecho, en las provincias hemos reasumido la facultad de policía y de contralor del sistema de trabajo; pero la ley nacional vigente establece la obligación en cabeza del

Ministerio de Trabajo, que es el órgano que tiene que controlar y sancionar las infracciones. Entonces, si estamos diciendo que de ahora en más vamos a tener el paraíso –ojalá que así sea– debemos puntualizar primero que si hay explotación de los trabajadores agrarios es porque los gobiernos de las provincias donde esto ocurre o el gobierno nacional no han cumplido con el deber que la Constitución Nacional, las leyes nacionales y las Constituciones provinciales les imponen en ese sentido.

No podemos decir que con una ley vamos a solucionar el tema. La ley debe ser aplicada. Entonces, los que han fallado en la ejecución y en la aplicación son precisamente los respectivos órganos de aplicación.

Fíjese, señora presidenta, que la ley del 99 establece que hay un síndico que debe hacer este tipo de controles; control que, por cierto, debería haber hecho. Desde 1999 está la obligatoriedad de realizarlos expresamente, más allá del Ministerio de Trabajo de la Nación y de los de nuestras provincias. Así que acá hay una omisión clara que debemos hacer notar.

Finalmente, quiero decir que acá se habló de que no ha habido incorporación de trabajo en negro o, como estamos diciendo actualmente, no se ha transparentado el trabajo informal siendo incorporado al formal.

Quiero leer –le pido autorización, señora presidenta, para no desvirtuar el asunto– la resolución que dictó la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2009 respecto de la República Argentina. En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral indica textualmente que los trabajadores agrícolas deben beneficiarse del mismo nivel de protección que los trabajadores de otros sectores. Ello implica que los trabajadores agrícolas deben estar protegidos por los regímenes de seguridad social aplicables a los sectores industrial y comercial. Un primer paso para conseguirlo es establecer un sistema que haga obligatorio el registro de los trabajadores agrícolas, como se ha hecho en la Argentina, bajo la presión de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores –UATRE–. Asimismo, los proveedores de mano obra deberán estar registrados y podrán estar autorizados para funcionar sólo con una licencia, y cualquier violación de la legislación aplicable debe dar lugar a la revocación de la licencia.

La Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2009, en el Informe N° 2 “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales”, incluidos al derecho al desarrollo, pone como ejemplo la incorporación al trabajo formal que se ha hecho en el sector de los trabajadores agrarios en la República Argentina.

Creo sinceramente que esta es una ley que tiene nombre y apellido. Puedo compartir o no compartir con la UATRE muchas cosas; pero lo que no puedo dejar de decir, señora presidenta, es que esta es una ley que afecta la columna vertebral del sindicalismo. Y como vengo del peronismo...

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Ya se terminó su tiempo...

**Sra. Negre de Alonso.** – ... como soy hija de un padre que estuvo preso por ser peronista, voy a terminar diciendo: estamos tratando de destruir al sindicalismo argentino; dividir para reinar.

La unión hace la fuerza. Y voy a pedir que se inserte, para no hacer perder más tiempo, lo que dijo el general Perón en el discurso del 1° de mayo de 1950 refiriéndose a los trabajadores y a los sindicatos...

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Senadora: nos espera una jornada larga, por favor...

**Sra. Negre de Alonso.** – Sí, presidenta; ya termino.



Entonces, necesitamos mejorar a los trabajadores...

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Senadora: la senadora Bongiorno le pide una interrupción.

**Sra. Negre de Alonso.** – No, no doy más interrupciones.

Necesitamos mejorar la situación de los trabajadores agrarios: por supuesto que sí, ¡pero no a costa de la organización que nos dejó el general Perón! Esto debe ser así, nos guste o no nos guste. Debemos respetar lo que los trabajadores han elegido por unanimidad.

Gracias, presidenta.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Gracias.

Tiene la palabra la senadora Di Perna. ¿Puede darle una interrupción a la senadora Bongiorno, por favor?

**Sra. Di Perna.** – Sí, cómo no.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Bongiorno.

**Sra. Bongiorno.** – Gracias, senadora.

Yo quería solamente hacer una acotación. Me refiero al hecho de que la ley que nosotros estamos modificando también tiene nombre y apellido, y realmente me dan escalofríos: Videla, Harguindeguy, Llamil Reston, Martínez de Hoy, Llerena Amadeo.

¿Merecen los sectores de nuestra población agraria, hoy uno de los más importantes, tener una nueva legislación, moderna y justa, para llegar a un país más equitativo? Creo que este es el proyecto que hoy estoy orgullosa de votar.

Realmente, quería hacer esa acotación. Videla, Harguindeguy, Llamil Reston y todos los que sabemos siempre estuvieron en la foto en La Rural, pero nunca metieron los pies en el barro ni nunca conocieron lo que fue el trabajo agrario realmente: solamente en cuestiones de costos y beneficios. Ya sabemos a quién pertenecían esas épocas.

Nada más, señora presidenta.

**Sr. Pichetto.** – No quiero ser antipático.

Hagamos cumplir los plazos que hemos acordado, y que las interrupciones sean cortas. Son preguntas las interrupciones. Son aportes para enriquecer el debate: no son discursos.

Tratemos de fijar reglas porque, si no, no avanzamos.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.

**Sra. Di Perna.** – Gracias, señora presidenta.

Como peronista y como militante del Movimiento Nacional Justicialista por supuesto que estoy de acuerdo con todas las leyes que signifiquen mejoras para los trabajadores, y fundamentalmente para los trabajadores rurales.

Precisamente en mi provincia, Chubut, en la localidad de Camarones, vivió el general Perón durante su infancia. En esa casa, que hoy es un museo, uno puede encontrar elementos y advertir cómo nació en su saber, en su mente, la idea de trabajar en favor de los derechos del peón rural.

La señora presidenta, con muy buen criterio, luego de haber ganado por más del cincuenta por ciento de los votos las últimas elecciones, dijo que viene en la Argentina una etapa en la cual trabajar para todos significa escuchar a todos los sectores. En ese sentido, en el Congreso de la Nación hemos visto que en este último tiempo –es decir, en las sesiones extraordinarias–, con la finalidad de sacar una cantidad importantísima de leyes, se están tratando normas tan sustanciosas, tan importantes, tan amplias como la que hoy tratamos sin haber escuchado a todos los sectores involucrados.

Sabemos que la principal legislación en este tema ha venido de gobiernos justicialistas; pero también los sindicatos han trabajado mucho en la mejora de los trabajadores. En este caso, la UATRE tiene presentado un proyecto de ley en muchos aspectos superador al que hoy estamos tratando. Y lamentablemente, por el breve tiempo disponible o que se le ha dado al tratamiento en comisión, no ha sido considerado. No ha sido considerado en la Cámara de Diputados y tampoco aquí, en el Senado de la Nación.

Muchas de las cuestiones fueron mencionadas por la senadora preopinante. Brevemente voy a referirme a algunas de ellas.

Por supuesto que coincido tanto con la postura del senador Martínez como con la de la senadora Negre de Alonso en considerar que el Renatre es una institución reconocida internacionalmente que ha trabajado muchísimo, no solamente en el registro sino también en la capacitación de los trabajadores rurales. Puede que requiera algunas modificaciones, pero no necesariamente tiene que desaparecer sino que debiéramos hacer el aporte necesario para que mejore y sea más eficiente.

También es cierto que la responsabilidad del trabajo en negro y del trabajo infantil en nuestro país es de los gobiernos locales y nacional. Así, donde fuertemente se tiene que trabajar en este sentido es desde el Poder Ejecutivo.

Alguno de los aspectos que no han sido considerados y que, de tratarse, podrían ser mejorados, tienen que ver con el ámbito donde se realizan las tareas rurales. Este proyecto de ley solamente considera lo que está fuera del ejido urbano: es decir, solamente un criterio geográfico. Con esto, también se logra disminuir la representatividad gremial, con la generación de conflictos en el encuadre gremial y de inseguridad jurídica.

Se considera también que se mantiene la separación entre trabajadores permanentes y no permanentes. Inclusive el trabajo de temporada, que se haya redactado en el proyecto del Ejecutivo, no contempla todos los derechos que establece la ley de contrato de trabajo para esta modalidad contractual. De esa manera, queda asimilada a la actual clasificación de los trabajadores no permanentes. Este es otro de los puntos.

Otro de los puntos es el tema de la obligación de garantizar la salud y la seguridad del trabajador. Esto no está desarrollado en concordancia con las normas de rango general y superior vigentes en el proyecto.

También flexibiliza las obligaciones del empleador eliminando algunas de las conquistas laborales existentes en los artículos 45 al 48.

Otro de los aspectos a considerar en el proyecto es que conserva la clasificación entre trabajadores permanentes y no permanentes bajo la figura de “trabajadores permanentes continuos y discontinuos” con el propósito de mantener el régimen actual. De esa manera, se perjudica a los trabajadores al no mantener la estabilidad del contrato de trabajo con un criterio general, a tal extremo que las indemnizaciones por antigüedad sólo están previstas para los trabajadores permanentes.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Senadora: la miembro informante del bloque del Frente para la Victoria le pide una interrupción.

**Sra. Di Perna.** – Si es breve, sí.

**Sra. Corradi de Beltrán.** – Simplemente para aclararle que la modalidad que se incorpora, que es justamente la de temporario y discontinuo, se asemeja en los beneficios al de permanente porque se considera que es para aquellos trabajadores que son empleados por el mismo trabajador para realizar las mismas actividades en distintos períodos.

De esa manera, esta categorización nueva contribuiría a que sean computados los años de antigüedad a fines de los futuros beneficios para ese trabajador.

**Sra. Di Perna.** – De todos modos, creo que hubiera sido muy enriquecedora la posibilidad de que los gremios participaran en el debate en las comisiones.

Cuando se habla de la jornada de trabajo, el proyecto del Ejecutivo contempla el límite de jornada sólo para los trabajadores permanentes continuos discriminando al resto de los trabajadores rurales. En consecuencia, les quitaría este derecho a los trabajadores no permanentes que hoy gozan de ese beneficio.

El límite de jornada de trabajo en este proyecto también es sólo para los trabajadores permanentes continuos y se discrimina –como dije– al resto de los trabajadores. Esto se ve en los artículos 40 a 44.

No se define en este proyecto el concepto de remuneración ni se determina el límite de los descuentos al salario. Tampoco se establece plazo para el pago de las remuneraciones y no se tiene en cuenta tampoco el plazo que rige hoy en día, que es de cuatro días hábiles para el pago. Esto corresponde a los artículos 32 a 39.

Este proyecto tampoco prevé la institución de indemnización sustitutiva para los trabajadores permanentes discontinuos, es decir los no permanentes.

No se respetan los mínimos salariales para los trabajadores a destajo y nada se dice al respecto: artículo 34.

En este proyecto –otro de los temas importantes que los gremios reclaman– no se sustituye ni se modifica la ley 25.191 sobre la Libreta del Trabajador Rural y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en razón de que ha resultado ser una eficaz herramienta de blanqueo de trabajadores rurales. A partir de su creación, entre otros beneficios, se instauró el subsidio por desempleo, cuyo monto duplica al otorgado por la ANSeS para todos los trabajadores.

Esto, sumado a todas las cuestiones que tienen que ver con el Renatre, me parece importante. De hecho, constituye un aporte que el gremio podría hacer para mejorar esta ley.

Por lo tanto, solicito que esto sea considerado y debatido integralmente por todos los sectores, tal como lo expresó la señora Presidenta de la Nación.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Juez.

**Sr. Juez.** – Expresaré breves conceptos, señora presidenta. El senador Linares va a fijar la postura del bloque del Frente Amplio.

Simplemente, le pedí el uso de la palabra por lo siguiente. Cuando el peronismo discute leyes sociales los trabajadores están contentos. Le adelanto que ésta es un muy buen proyecto de ley, aunque mi especialidad no es el Derecho Laboral. Le decía recién, felicitando al senador Martínez su increíble síntesis –típica de alguien que no es abogado porque no tienen esa capacidad–, lo importante de los beneficios de la ley que es una muy buena ley.

Pero temprano esta mañana, al salir del hotel, me junté con un puñado de trabajadores rurales que estaban esperando una manifestación con la intención de explicarles precisamente que esta es una buena ley; que verdaderamente pone el eje de la cuestión de reclamos que hace años se vienen planteando; que establece mejoras en las condiciones laborales que ellos vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo. Me contestaron que tienen un proyecto mejor que este y superador.

Entonces –si no lo dijera, sería un hipócrita, un cínico; y éstas son cualidades y calidades que no cultivo–, me pregunto qué nos pasa que estamos discutiendo una buena ley con los trabajadores detrás de las vallas, con los laburantes protestando. Se trata de una ley importante y reclamada. Hubo mucha campaña en el interior. Los que venimos del interior –el 99 por ciento de los que estamos acá de allí venimos– sabemos que este es un reclamo de los trabajadores. Los que venimos de provincias que lindan con la zona Norte sabemos que hay

una expoliación y explotación increíbles; que esta ley contempla situaciones de jornadas y condiciones que son reclamos casi imperiosos, casi diría. De hecho, en cada campaña los trabajadores nos plantean estas cuestiones.

Entonces, mi reflexión –y éste es nada más el modestísimo aporte que quiero hacer porque, repito, el senador Linares va a fijar la postura del bloque– es que nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, porque estamos discutiendo una buena ley. Entonces, los trabajadores rurales y estibadores tienen que saber que es una buena ley. Nos faltó diálogo; nos faltó posibilidad de coincidir, de buscar un marco.

Comparto el argumento de la presidenta. Esto se planteó el 1° de marzo y no le dimos “pelota”; no nos pusimos a trabajar. ¡Claro! Ahora, en la “atropellada”, pareciera que estamos sancionando algo que constituye un despropósito; y no lo es. No lo es, y repito mi criterio: ¡Ojalá, la próxima vez que discutamos leyes que tienen un profundo sentido social, como ésta que estamos discutiendo, lo podamos hacer con las galerías llenas de “laburantes” que nos aplaudan, que nos agradezcan!

Porque la verdad, señora presidenta, es que estamos discutiendo una muy buena ley.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Señora presidenta: Alguien atribuye al ex canciller de hierro Otto von Bismarck una frase que compara las leyes con las salchichas: es mejor no saber cómo fueron elaboradas.

Eso parece esta norma porque, como dice el senador Juez, entre gallos y media noche, digamos: ¿cuál es el apuro para que el Senado de la Nación, en dos días, tenga que revisar, tratar y debatir una norma de cien artículos que es tan importante para tantas regiones del país; para el trabajo rural en todo el país?

Pareciera ser que no tiene ninguna importancia que, tanto los trabajadores como los empleadores, en esta oportunidad hayan pedido que no se trate la ley o que se les dé participación; participación que no les estamos dando.

El propio debate está mostrando que ni siquiera se debatió en comisión: que la reunión de comisión del lunes se hizo al sólo efecto de la formalidad de firmar un dictamen. Pero aquí estamos llenos de dudas y de discusiones porque, obviamente, no hubo tiempo suficiente para verlo en profundidad.

El proyecto, ¿es bueno? No. ¿Es malo? Tampoco. Tiene aspectos positivos y tiene aspectos muy negativos.

Los aspectos positivos son los siguientes. Pone fin al estatuto de la dictadura militar: en eso, estamos de acuerdo. Restablece importantísimos derechos de los peones rurales: estamos de acuerdo.

La técnica legislativa es pésima y va a dar lugar a una serie de conflictos, sobre todo por la confusa relación con la Ley de Contrato de Trabajo.

Lo deplorable también es que se mantenga una institución –a nuestro criterio nefasta– como la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, resabio de la dictadura, que anula la negociación paritaria. Porque si bien se da participación a empleadores y a trabajadores, el gobierno se reserva cinco miembros y designa a los representantes de los otros sectores de una terna. Es decir que empleadores y trabajadores, aun poniéndose de acuerdo, no podrían vencer al Estado, que tiene cinco miembros.

Como representante de una provincia digo que las comisiones regionales, que deberían tener una participación muy importante –porque la Argentina es muy diversa y porque aquí, en Buenos Aires, lo más cercano a la tierra es la tierra que cabe en las macetas–, se convierten en algo con un papel simbólico. Hace recomendaciones no vinculantes.

Y lo deleznable es la reforma del Renatre, con una orfandad total de fundamentos. El mencionado canciller von Bismark fue quien en 1893 dio impulso a la creación de los derechos sociales que hoy están extendidos en toda la Europa continental y en América latina.

Y nuestro olvidado artículo 14 bis de la Constitución dice que el seguro social obligatorio estará a cargo de entidades administradas por los interesados, con participación del Estado. Con la sanción de esta ley una de las pocas instituciones de la seguridad social que cumplía con el artículo 14 bis de la Constitución pasa a ser dirigida por el Estado. De modo que aquí deberíamos habernos dado el tiempo suficiente, porque la importancia de esta norma merecía una mayor reflexión por parte de los representantes de las provincias.

**Sra. Presidenta** (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cano.

**Sr. Cano.** – Dudaba si me la iba a dar, presidenta. Pero, bueno: muchas gracias. (*Risas.*)

En primer lugar, quiero hacer algunas reflexiones que me parece que hay que hacer sin entrar a repetir el concepto que ya manifestó el senador Martínez con respecto a las cuestiones que nosotros valoramos y nos parecen importantes en la sanción de esta norma.

La primera de ella se refiere a si esta es una norma que tiene que ver con su génesis en la dictadura. Bueno: en los últimos 20 o 18 años gobernó el oficialismo. En tal sentido, creo que debemos hacernos cargo cada uno de la parte que nos toca porque todavía existen normas que tienen que ver con sus génesis en la dictadura militar.

Por otra parte, la miembro informante manifestó que la mayoría –textualmente, copié– de los trabajadores rurales trabaja en condiciones infrahumanas. Me parece que también ese es un severo llamado de atención, porque si efectivamente las condiciones laborales –como dice la miembro informante– son infrahumanas también alguna responsabilidad tiene el Estado, que ejerce el poder de policía, en controlar que las leyes laborales vigentes, tanto nacionales como las normativas provinciales –que las hay y muchas– efectivamente se cumplan.

El senador Morales va a plantear cuáles son nuestras oposiciones y nuestra propuesta de modificación de una norma sobre la que también vale la pena reflexionar. Podríamos sin duda discutir sobre la urgencia de tratar hoy una norma de estas características; pero, por otra parte, también tenemos que reflexionar que –como decía al principio– es una norma que viene de la dictadura y que, ya después de 28 años de democracia, todavía tiene vigencia. Quiere decir que esa es una deuda de la política.

En segundo lugar, también puede haber una tendencia a que quienes eran parte del movimiento sindical, que aportaron y apoyaron a la construcción o al posicionamiento de este gobierno en un momento y hoy están en veredas opuestas, por esa sola situación a quienes formamos parte de la oposición, no nos hagan ver que hay artículos importantes de esta norma. Porque independientemente de esa situación de conflicto o de tensión nosotros, por la oposición misma, no nos vamos a poner en necios no apoyando aquellos artículos que van a redundar en beneficio para los trabajadores.

En lo que no estamos de acuerdo es en que, so pretexto de esta serie de artículos que enumeró muy bien el senador Martínez, se elimine el Renatre sin ningún tipo de justificativo.

– *Ocupa la Presidencia del H. Senado el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.*

**Sr. Cano.** – Como bien decía la senadora Escudero, los recursos del Renatre forman parte del patrimonio de los trabajadores.

Nosotros estamos de acuerdo con que el Estado forme parte del Renatre, pero no que administre sus fondos. ¿Por qué? Porque honestamente, en el marco de los ejemplos que el Poder Ejecutivo tiene para mostrar en materia de administración, podríamos hablar de los



recursos de la APE. Si hay dirigentes sindicales que han estado presos y hay causas por haber presentado carpetas o troqueles “truchos”, la verdad es que una enorme responsabilidad de esto obviamente la tienen quines han sido los autores de esas maniobra; pero fundamentalmente la tiene el Estado. Les quiero recordar a los señores senadores que la APE depende del ministerio y que los funcionarios han sido puestos por el Poder Ejecutivo. Entonces, si el ejemplo de administración de los recursos del Renatre va a ser el de la APE la verdad es que va a ser peor el remedio que la solución.

Finalmente, considero que en una norma que es de derecho laboral se entremezcla algo que tiene que ver con la ley 25.191, que es la seguridad social. Y en eso sí puede tener participación el Estado, pero bajo ningún punto de vista se puede eliminar a quienes aportan a ese fondo para que lo administre solamente el Estado.

Finalmente, como decía también el senador Juez, hubiese sido esta una muy buena oportunidad para que tanto empleadores como trabajadores, que vienen trabajando en una norma con muchos artículos muy relacionados con lo que vamos a aprobar hoy, hubieran podido formar parte de este debate y no que lleguemos a esta instancia en la situación de conflictividad en la que se está.

Así como manifesté que es un hecho de violencia no permitir a los trabajadores, a través de la Gendarmería, que participen democráticamente en las manifestaciones con respecto a este proyecto de ley, de la misma manera adhiero a las palabras del senador Aníbal Fernández. Nosotros no vamos a convalidar ninguna manifestación que tenga que ver con la amenaza; con el amedrentamiento a los senadores por las posiciones políticas que tomen en este recinto. Por lo tanto, también repudiamos ese tipo de manifestaciones.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador López.

**Sr. López.** – Señor presidente: primero, quizá sea insistir o repetir algo; pero no puedo dejar de destacar lo importante que es que estemos dando este paso de legislar en democracia sobre derechos sociales, sobre derechos laborales; poder salirnos de un régimen heredado de ese proceso tan nefasto que atravesó nuestro país durante la dictadura militar. Seguramente, podrá decirse que pudo haberse hecho antes; podrá decirse que puede hacerse lo mismo con muchas otras leyes: seguramente podrá decirse. Eso no empaña la importancia de que estemos dando este paso.

Lamentablemente, muchísimos de los destinatarios de este proyecto o de estas preocupaciones nuestras creo que no están enterados ni de la sesión ni del proyecto ni de nuestra preocupación.

Históricamente los trabajadores rurales han sido casi como un sujeto invisible en nuestra sociedad y creo que reconocerles derechos, aunque sean a nivel de la recuperación de derechos que a lo mejor tuvieron y que perdieron, no es un punto de llegada sino un punto de partida.

Seguramente no va a poder pensarse en construcción de subjetividad, en reconocimiento de sujeto, en construcción de visibilidad, si no es a partir del reconocimiento del derecho. Eso me parece importante. Si después se da o no esa visibilidad; si después se gana o no se gana el reconocimiento pleno, el lugar que le corresponde en la sociedad, en el sistema de producción, a los trabajadores agrarios, serán otros momentos de un proceso; serán otras batallas. Pero seguramente que esos momentos posteriores no podrían darse sin este primer paso que es el reconocimiento del derecho.

En este proceso en el cual estamos dando este primer paso el horizonte que tiene que guiar las acciones, los pasos y las reflexiones de la Nación toda me parece que es reconocer el lugar del protagonismo que a algunos sectores y a algunos actores les corresponde pero que

hasta ahora no han tenido.

Quizás esté demás destacar la particularidad o el carácter fundamental que tiene en toda sociedad el tipo de trabajo sobre el cual estamos debatiendo. Han habido épocas en la historia no sólo del país sino de la humanidad toda en que hemos vivido sin teléfonos celulares, sin televisores tan grandes o tan delgados, sin un montón de otras cosas que también ocupan trabajadores y que también forman parte de nuestro modo de vida; pero no tenemos registro de que haya habido época alguna de la historia del país ni de la humanidad en que hayamos podido vivir sin alimento.

El alimento, más allá de todos los eslabones por los cuales atraviesa la cadena hasta llegar a los hábitos cotidianos nuestros de almuerzo, de cena, de las vocaciones que cada quien tenga diseñada en la organización de su vida diaria, empieza en ese lugar: empieza en el contacto del hombre con la tierra. No hay todavía otra forma de producción de alimentos que tenga un origen independiente, salvo el caso de los que provengan de ambientes o ámbitos acuáticos.

De la vinculación del hombre con la tierra, tanto sea para la producción de todas las especies vegetales como para las especies animales, tanto en la producción de carne como en otros derivados como los lácteos, viene el trabajo agrario. De hecho, es prácticamente el único eslabón del cual no podemos prescindir, por lo menos en cuanto a ensayos teóricos, abstractos, lógicos si uno pudiera pensar de qué puede prescindir en eventuales modelos de organización de las sociedades. Sin embargo, generalmente ha sido, como quien dice, el último orejón del tarro.

En tal sentido, me parece que pensar en algunos aspectos que contempla el proyecto como los de higiene y seguridad, elementos de seguridad que deben ser provistos por el empleador o la obligación del empleador de garantizar la limpieza y desinfección de ropa contaminada, de alguna manera, implica el reconocimiento de un problema.

Seguramente, la iniciativa en consideración será parte de la solución de un problema, pero, por sobre todas las cosas, quizá lo más trascendente sea el reconocimiento por parte del Estado de ese inconveniente y, al identificarlo, se podrá seguir trabajando sobre él.

A lo largo de los años se tienen constatados diferentes inconvenientes provocados por contaminación a partir de las fumigaciones, uso de agroquímicos y plaguicidas que degeneran en enfermedades, incluso a veces congénitas que, si bien no forman parte de consecuencias casuales o secundarias de un problema principal, nos da cuenta de un problema central relacionado con nuestra manera de vincularnos como nación con la tierra, la naturaleza y con nuestras matrices de producción y consumo que, naturalmente, están siendo puestas en crisis. Esos debates llevan décadas y no se resuelven en semanas ni en meses. Sin embargo, comenzar a reconocer ese problema nos va a conducir a pensar en aspectos sistemáticos y estructurales –no coyunturales– que demandarán un esfuerzo para resolverlos de raíz.

Sabemos y tenemos diagnosticado como Nación la importancia y el carácter estratégico de los alimentos para el país y para el mundo en el marco del Siglo XXI.

A nivel nacional se vienen pensando y elaborando distintas alternativas que dan cuenta de esta necesidad, tal el caso de los programas agroalimentarios y agroindustriales que, seguramente, tendrán vinculación con otras cuestiones que deberán ser abordadas como la soberanía y seguridad alimentaria. Pero todos esos temas tienen un protagonista que, me parece, se encuentra históricamente falto de reconocimiento. Me refiero a un sujeto invisible y, en muchos casos, esclavizado, más allá de que la historia indique que ya hace más de doscientos años que no existe la esclavitud.

Creo que la iniciativa en consideración es un aporte a todas estas cuestiones.



Sé que se han criticado aspectos de la norma. Y está bien que se lo haga porque no hay ley que sea perfecta, ni mucho menos que conforme o satisfaga todas las miradas. De todas maneras, hay cosas que están contempladas. No creo que haya necesidad de transcribir todos los derechos y garantías que reconoce la ley N° 20.744 porque con la cláusula genérica que contempla la posibilidad de la aplicación supletoria eso ya está cubierto. Es decir, no se aplica en aquellos casos en que, expresamente, están legislados de manera diferente en la norma en consideración. A su vez, hay principios que no son propios de una ley sino de una rama jurídica como el derecho laboral.

En efecto, el derecho del trabajo tiene más de un siglo de historia y, a través de ella, ha cultivado como rama de una ciencia sus propios principios, tal el caso del principio *in dubio pro operario*. Es decir, él no es de un sector del trabajo, de una ley y de un estatuto en particular sino que hace a todo el derecho laboral.

Me parece muy importante el avance de la norma en materia de vivienda, alimentación y agua potable. Si uno lee el artículo tiene derecho a imaginarse una vivienda construida en base a esa previsión normativa. Ciertamente, salir de los ranchos de barro con techo de paja es un avance importante. Hay que ser consciente de que esa clase de viviendas precarias existen y conllevan una serie de inconvenientes adicionales no solamente vinculados con la precariedad en sí sino también con problemas relacionados a la vinchuca, el chagas, las pulgas, las chinches y toda una serie de inconvenientes propios de ciertos sectores de nuestro país. La iniciativa en consideración, entonces, es un avance y significa una mejora.

No creo que sea feliz la comparación que se ha hecho en base a una cita respecto de la ley y las salchichas. Desde una banca decir que es mejor no saber cómo se hace la ley es poco acertado. No solamente no lo comparto sino que, además, me parece preocupante.

Sí creo que hay materias vinculadas que en su momento deberán ser objeto de la reglamentación. Pero trato de ver la norma en el proceso y no como un compartimento estanco o una cuestión aislada.

Se ha dicho que se destruía el sindicalismo. La verdad es que no creo que sea así.

En esa materia, la Argentina tiene serias observaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Prácticamente, esto ha sido así desde la época en que se sancionó la Ley de Entidades Sindicales a fines de los años ochenta. Dichas observaciones han sido sostenidas casi año a año por no adecuarse nuestro modelo sindical a las exigencias de libertad sindical. Es una materia pendiente en la que deberá avanzarse en algún momento.

Hubo manifestaciones que pueden ser parciales en el contexto del proyecto y que quizá respondan al interés de determinadas conducciones antes que a los trabajadores en sí y que, como dije, en su gran mayoría, por esa invisibilidad a la cual los arrojamos como Nación a lo largo de nuestra historia, ni siquiera están enterados de lo que aquí se trata. No hay registro histórico reciente de huelgas de los trabajadores rurales, y pensar el sindicalismo sin el ejercicio de la huelga es, ciertamente, muy difícil. Entonces, no creo que se le esté asestando un golpe al sindicalismo ni mucho menos destruyéndolo. En todo caso, se da cuenta de la necesidad de avanzar por otro camino en otro de los aspectos centrales del derecho del trabajo como es la ley sindical. Seguramente, ese momento ya va a llegar.

Adelanto el voto favorable de nuestro bloque a la iniciativa en consideración y celebramos como auspiciosa esta oportunidad y debate de avanzar en la recuperación de derechos para uno de los sectores más desprotegidos y, a su vez, más fundamentales de nuestro sistema productivo y de nuestra economía.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.

**Sra. Higonet.** – Señor presidente: la verdad es que no puedo dejar de manifestar la doble

alegría que siento hoy.

Por un lado, por estar como legisladora tratando una iniciativa de esta naturaleza y, por el otro, por ser representante de una provincia como La Pampa donde, justamente, su riqueza es el fruto del esfuerzo que pone el trabajador rural.

Cuando uno habla de pampa, inmediatamente, tiene la imagen de ese enorme horizonte que solamente se puede llegar a cortar por alguna figura de alguien sembrando o a caballo o haciendo trabajos de arado. Esa es la imagen. Por eso, esta es nuestra idea: es decir, que hoy estemos tratando un proyecto que constituye una verdadera reivindicación social y laboral para este sector.

Esta iniciativa significa orientar el pensamiento y el sentir nacional hacia los trabajadores, hacia los humildes; hacia un sector que ha estado relegado.

Es cierto que estos trabajadores fueron considerados y revalorizados por el general Perón en 1944 mediante una norma que fue luego ratificada en 1946. Sin embargo, como ya se dijo, esto después fue desdibujado. Posteriormente, a través de una ley de facto –que, como dijo la señora senadora Bongiorno, tiene nombre y apellido muy claros– luego se los excluyó de la ley de trabajo.

Aquí estamos hablando de un proyecto que hace referencia al sentido constitucional, a derechos humanos, a tratados y a relaciones internacionales. Como señala la OIT, estamos hablando de trabajo decente. Esto es lo que todos piden: todo aquel que trabaja aspira en su vida a contar con una remuneración digna, a tener seguridad para su familia, seguridad en su trabajo y protección social de su familia. Es decir, a vivir dignamente: a tener igualdad de oportunidades con respecto al resto.

Justamente, me permitiré leer un párrafo parte de un informe sobre el estado de las clases obreras fechado el 30 de abril de 1904 que señala que el estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso; la explotación inicua y el trabajo brutal. Indica que se ha visto en todo el interior la explotación. El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República. Y acaso más en la época de cosecha. Esto es, como dije, de 1904. Lo cierto es que, a ciento siete años, todavía seguimos encontrando situaciones de este tipo.

Hemos leído últimamente en muchos medios cómo se han encontrado empleados en situaciones de hacinamiento, trabajando hasta dieciséis horas. Incluso, hemos llegado a mencionar aquí que a veces el título era “trata de personas”. Por eso es tan importante este proyecto: por todo lo que se cuestionaba aquí cuando nos preguntábamos por qué, cómo puede pasar, cómo pueden estar viviendo así, cómo pueden hacer tantos kilómetros, cómo se puede jugar con su mercadería y con las cosas mínimas e indispensables para una vida digna. Cada uno de esos puntos estoy convencida de que están totalmente considerados y desarrollados en este proyecto.

No voy a ahondar en ellos porque cada uno de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra ya se han explayado al respecto. Sin embargo, hay dos a los que me quiero referir: el establecimiento de la jornada de trabajo de cuarenta y cuatro horas y el salario, que no puede ser menor que el mínimo, vital y móvil.

Nosotros también hemos presentado otro proyecto –lo quiero recalcar– de otro sector de trabajadores para tenerlos en cuenta y protegerlos al amparo de este derecho tan fundamental.

También es importante que se haya bajado la edad jubilatoria a los cincuenta y siete años. A nadie le escapa –ocurre muchísimo en el interior, en nuestras localidades– que ya prácticamente cerca de los cincuenta años quienes trabajan en el campo comienzan a ser

dejados de lado; comienzan a decirles que ya no pueden prestar el servicio de igual manera. Es lógico: nadie duda de la rigurosidad que tienen las tareas del campo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos trabajadores llegan a nuestros pueblos, van a la zona urbana y es el municipio el que en definitiva tiene que hacerse cargo de una casa porque toda su vida vivieron en el campo. De igual modo, deben hacerse cargo de la salud y de buscarles alguna manera para que puedan vivir. Pero hoy eso está totalmente comprendido, dado que es un derecho total que otorgamos a estos trabajadores a través de este proyecto de ley.

Con todo respeto, me voy a tomar el atrevimiento de recordar lo que dijo Perón cuando estableció el estatuto al manifestar que sabía que el estatuto del peón ha sido, es y será resistido; pero, también, que ha sido, es y será indispensable establecerlo.

Por todo lo expuesto, señor presidente, no tengo dudas de que este proyecto es y será indispensable para los trabajadores rurales.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Linares.

**Sr. Linares.** – Señor presidente: atento el tiempo de debate de este proyecto, creo que técnicamente se han analizado ya todos sus pro y contra con detenimiento.

En tal sentido, creo que todos hemos coincidido en que se trata de un proyecto de ley muy importante para la Argentina y para los trabajadores rurales en particular. Este sector normalmente ha tenido una condición muy especial dado que comprende a trabajadores que viven separados en el campo, razón por la cual es muy difícil que puedan hacer una huelga. Por eso, sus condiciones laborales han sido en muchos casos de explotación.

Todos los que estamos en esta Cámara pertenecemos a regiones y a provincias que tienen particularidades productivas, todas con un fuerte sector rural; por supuesto, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está claro que no es lo mismo ser empleado rural en la Patagonia que en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa. Cada una tiene sus condiciones especiales.

Nuestro bloque va a apoyar en general este proyecto porque nos parece que constituye un avance y una plataforma importante sobre la cual mejorar, sin perjuicio de que obviamente vamos a dejar algunas disidencias planteadas. Como no estuvimos en la Comisión vamos a plantearlas aquí.

Entonces, vamos a apoyar esta iniciativa como homenaje a las viejas luchas de los trabajadores rurales que sufrieron una gran represión hace muchísimos años –casi noventa, allá en la Patagonia– en lo que fue tal vez el primer antecedente de ese tipo de luchas. Aquí están presentes Freddy Martínez y algunos otros responsables de esa zona que saben lo que es todavía hoy trabajar en esos sectores rurales; en esos campos inhóspitos y en soledad.

Por eso, en nombre de esas luchas; en la seguridad de que esta iniciativa mejora la situación de los trabajadores rurales; y porque ellos realmente merecen este avance en su condición laboral y de vida, nosotros acompañamos desde nuestro bloque este proyecto del oficialismo aunque, obviamente, haremos algunas consideraciones que nos parecen fundamentales.

Por ejemplo, el proyecto establece una jornada de ocho horas; fija la edad jubilatoria en 57 años, con veinticinco de aportes; al mismo tiempo se reconoce a los peones derechos tales como las remuneraciones mínimas fijadas en paritarias, que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil; y estipula el reconocimiento de las horas extras, el descanso semanal, y condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Por todo ello, desde el FAP consideramos que este avance del derecho de los trabajadores con la sanción de este nuevo Estatuto del Peón Rural es una base importante desde la cual mejorar algunas de las cosas que aquí se han dicho con criterio.

Tal vez esta norma sea perfectible como todas; pero es importante tener una base como esta, con un fuerte consenso en general.

Sin embargo, para nosotros se plantea aquí un error conceptual que queremos dejar marcado. Vamos a acompañar en general, pero no lo haremos en lo que está vinculado con el artículo 15, porque me parece que no corresponde. Nos parece que atenta contra el espíritu que nosotros creemos que debe tener esta ley.

Nos vamos a oponer también al artículo 91 porque, como bien decía el senador Martínez, abre un interrogante, una puerta, que no nos parece adecuado en este momento, y queremos dejar constancia de nuestra posición contraria a esto.

Y también queremos rechazar la disolución del Renatre, un organismo que más allá de algunas críticas que se le puedan hacer, ha tenido un reconocimiento internacional y ha cumplido una función; puede ser mejorado, pero la verdad es que es una participación importante del sector de los trabajadores y del sector patronal. Entonces, me parece que una modificación a esto puede generar alguna alteración de algunas políticas que el gremio ha ido teniendo y que ha ido consolidando, y no nos parece adecuado su reemplazo por un organismo donde solamente el Estado se haga cargo de esta responsabilidad.

Nosotros creemos en un modelo de Estado donde la participación sea el centro, el tema fundamental, por eso no podemos acompañar este artículo.

Consideramos que todos los estados modernos deben tener una responsabilidad tripartita entre los sectores patronales, los de los trabajadores y los del Estado, porque queremos un Estado presente, pero no un Estado con poder de discriminar o de actuar sin el consenso necesario. Por eso dejamos constancia de esto.

Vamos a apoyar en general este proyecto porque –como dije y reitero– nos parece una muy buena plataforma en la cual podremos seguir trabajando en algunos conceptos técnicos que aquí se han vertido y que tal vez merecerían un tratamiento más dilatado. Y quiero que conste que nos vamos a oponer a los artículos 15, 91 y todos los que tengan que ver con la disolución del Renatre.

**Sr. Presidente.** – Se toma nota.

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** – ¡Qué raro clima el que estamos viviendo!

Todos dicen que estamos tratando una magnífica ley y en la calle hay veintitrés tomas de rutas y caminos en todo el territorio nacional y de tres accesos a la Capital Federal, dos de los cuales se acaban de levantar y los trabajadores rurales están marchando hacia el Congreso, todos oponiéndose a lo que estamos haciendo en el Congreso.

Estamos dictando una ley que en principio otorga derechos y los que van a recibir los derechos se oponen a su sanción. Eso es porque hay algo que está mal.

Sobre el otorgamiento de los derechos estamos absolutamente de acuerdo. El primero en otorgar los derechos a los trabajadores rurales y en dictar lo que se llamó el Estatuto del Peón de Campo fue el decreto 28.196 del 17 de octubre de 1944, –fíjense qué fecha curiosa–, que fue reafirmado por la ley 12.921 de 1949 y reglamentado por el decreto 34.147 del mismo año. Me acota el senador Romero –a quien le agradezco– que el autor de la reglamentación fue el doctor Tomás Jofré. Lo cito muy especialmente porque es un ilustre puntano, un ilustre sanluiseño, autor –entre otras cosas– del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires y del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de San Luis; y hoy me acabo de enterar que también fue el autor de la redacción del decreto reglamentario del Estatuto del Peón de Campo.

No puede haber ninguna duda de nuestra vocación de votar con mucha alegría todos

los derechos del peón de campo, de los trabajadores de campo. ¿Por qué tenemos un conflicto, entonces? Porque en esta ley se mezclan otros dos temas que tenemos que abordar, y uno de ellos es el desguace de la organización sindical, es decir, permitir que la organización sindical de los trabajadores rurales pueda ser dividida en varias organizaciones sindicales, tema sobre el cual el peronismo, y especialmente Perón, se preocupaba muchísimo.

Con el permiso de la Presidencia, voy a dar lectura a lo que un 1° de mayo, después de brindar su discurso inaugural de las sesiones en el Parlamento y en conmemoración del Día del Trabajo, dijo Perón en la Plaza de Mayo: “Compañeros: yo les he dado una doctrina justicialista, he asegurado una justicia social, he conquistado una libertad económica, les he dado una realidad política, todo consolidado en la constitución justicialista. Para el futuro han de ser ustedes los guardianes, han de ser ustedes los que juzguen y han de ser ustedes los que sancionen.

“El movimiento sindical argentino y el pueblo argentino tienen la enorme responsabilidad de conservar este legado que nuestra generación creó para felicidad de nuestros hijos y de nuestros nietos, y para que no vuelvan a producirse los dolores y las miserias que hemos presenciado. Por eso, compañeros, es necesario afirmar los sindicatos, es necesario apuntalar a la CGT. Es menester que todos los trabajadores de la patria y de este inmenso movimiento sindical terminen por establecer que en esta tierra los trabajadores son uno para todos y todos para uno; y, así unidos, los sindicatos y el pueblo argentino, custodiarán y defenderán en el futuro sus reivindicaciones y serán el pueblo y los trabajadores, marchando del brazo por la ancha calle de la historia, quienes escribirán el último capítulo justicialista de esta querida patria argentina.”

No se puede permitir y aceptar que se desguace el sindicato de los trabajadores rurales. Como bien dijo el senador por la provincia de Buenos Aires, es un sindicato en el que, por la forma en que se desarrolla la actividad, es muy difícil que pueda hacer una huelga, porque los trabajadores están todos aislados. Entonces, todo lo que sea fomentar la división de esta organización sindical, en principio, atenta contra los derechos de los trabajadores.

No tengo ningún compromiso con la UATRE. No estoy defendiendo al compañero “Momo” Benegas, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, e incluso hemos participado en la elección general defendiendo diferentes candidatos. Yo he estado enfrentado con él en las elecciones, pero no es una cuestión personal sino de principios lo que pretendo discutir hoy.

En este sentido, creo que tenemos que avanzar en el artículo 14bis de la Constitución nacional. La primera parte de ella está referida a los derechos de los trabajadores, a las condiciones dignas y equitativas de la labor, a la participación en las ganancias de las empresas, y en todo eso tenemos que avanzar, porque la parte de la ley que se refiere a los derechos de los trabajadores es correcta.

Creo que también tenemos que avanzar en que la organización sindical sea libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Esta es la reforma del modelo sindical que tenemos que abordar, no el desguace de los sindicatos. ¿Les vamos a ir sacando de a una plumita hasta que dejemos a la gallina desplumada y a los trabajadores sin protección? Tenemos que discutir un nuevo modelo sindical, con libertad y democracia sindical y con control judicial de las elecciones y de los padrones para que haya periodicidad en los mandatos. Este es el fondo del problema. A nosotros nos parece incorrecto abordar el problema sindical desguazando al sindicato.

El segundo tema que nos parece incorrecto es fulminar el Renatre. Todos coincidimos



en que el Renatre ha sido una creación exitosa. Más aún, según me informaron, el Renatre paga el doble de lo que paga el seguro de desempleo común. Aparentemente, parecería que se trata de una cuestión por lo menos no explicada o que, mejor dicho, sí nos permite interpretar por qué los trabajadores rurales están en las calles, tomando las ciudades y las calles de Buenos Aires. Porque en nombre de los derechos de los trabajadores y de los peones rurales estamos tocando sus organizaciones; en este caso, su organización sindical y el ente autárquico, que ha sido exitoso y que como han dicho varios señores senadores fue puesto como ejemplo y modelo en la Organización Internacional del Trabajo.

Por lo dicho, me parece que este es el verdadero meollo del problema que tenemos hoy. Hay una parte del proyecto de ley que está bien: tal vez, se podrá discutir si los derechos son un poco o un poco menos, si está bien o mal redactado, pero, en definitiva, se trata de cuestiones importantes que no hacen a la esencia. En este sentido, todos hemos expresado que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que mezclado con eso estamos tocando la otra parte que nos provoca una profunda contradicción.

Entonces, nuestro interbloque va a votar este proyecto de ley en general en forma positiva, a pesar de la grave discrepancia que tenemos con respecto al desguace de la organización sindical y a la transformación del Renatre en el Renatea. A su vez, vamos a votar en particular negativamente los artículos 3°, 5°, 6° y 7°, que se refieren a la organización sindical; 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, referidos a la Bolsa de Trabajo y que también afectan a la organización sindical; y, por último, vamos a votar negativamente los artículos 106 y 107, que se refieren al Renatre.

De esta forma dejamos fijada la posición del interbloque federal.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: creo que el señor senador Rodríguez Saá ha puesto el debate en su punto justo. Además, considero que los argumentos de los senadores de las distintas bancadas han sido coincidentes en cuanto al tema de que el proyecto que estamos tratando es claramente un avance en materia de derechos para los trabajadores del campo. Entonces, la estructura y el esquema que acaba de plantear el señor senador Rodríguez Saá es lo que debemos debatir acerca de este tema.

Por lo tanto, yo digo que hay una cuestión de normativa de derechos para los trabajadores y dos o tres temas que tienen que ver con la política pública y con la política gremial.

Desde el punto de vista de los derechos, voy a tratar un poco de decodificar los motivos por los cuales afuera hay trabajadores cortando rutas. Seguramente, eso tiene que ver con lo que acaba de plantear el señor senador Rodríguez Saá. En tal sentido, quienes lean este proyecto de ley van a sufrir una gran contradicción. Porque, en verdad, gran parte del texto de este proyecto de ley tiene que ver con banderas de lucha de la UATRE y de los trabajadores rurales que vienen de décadas atrás. Yo creo que en democracia llegamos tarde; mejor dicho, no sé si tarde, pero nos ha llevado mucho tiempo modificar esta otra rémora de la dictadura. Entonces, supongo que algunos tendrán la contradicción de ver que acá estamos tratando cuestiones por las que vienen luchando desde hace muchos años pero que, a su vez, esto toca algunos temas que, tal como ha planteado el señor senador Rodríguez Saá, tienen que ver con la estructura de la organización gremial y con el manejo de recursos.

Con relación a la ley 22.248, que hoy estaríamos dejando atrás, quiero decir que cuando uno la empieza a leer con detenimiento se da cuenta de que hasta presenta una lógica militar en algunos aspectos. No resguarda al trabajador frente al fraude laboral; no incorpora la presunción interpretativa a favor de la existencia de la relación laboral; mantiene la

división entre permanentes, transitorios y no permanentes, sin establecer la categorización de la realidad de la actividad del trabajo en el campo; disminuyó el período de vacaciones anuales; no fijó el límite de la jornada de trabajo; tampoco estableció criterios con relación al pago de horas extra; no contempla normas sobre jornada nocturna, que sí aborda el texto que estamos tratando; no dice nada sobre el tema del trabajo insalubre; disminuye el período de descanso entre jornada y jornada.

Todo esto ha tenido que ver con la ley 22.248 y con distintas normativas que no han mejorado la situación de los trabajadores. Tampoco incluyó la indemnización sustitutiva del preaviso en caso de despido incausado. No fijó el límite del 20 por ciento en las deducciones a los trabajadores. Prohibió el derecho de huelga. No incluyó el estado de excedencia para el trabajo de las mujeres. No estableció normativas para erradicar el trabajo infantil y de menores, sino que por el contrario cuando uno aborda el capítulo del trabajo en familia hay normas generales respecto del trabajo de niños acerca de las cuales reivindicó el trabajo de este Senado y de la Cámara de Diputados con relación a la aprobación de distintas normas en la materia; particularmente, con respecto a la erradicación del trabajo infantil y al establecimiento de la edad mínima de admisión de empleo. En ese sentido, cabe señalar que la ley de la dictadura 22.248 es muy retrógrada en este tema puesto que asume el concepto del trabajo en familia y plantea la prohibición de que trabajen menores de 14 años –cuando la normativa actual, que está en línea con la OIT, parte de los 16 años como edad mínima de admisión para el empleo en todas las categorías laborales, particularmente en el trabajo rural– pero resulta que en el caso del trabajo familiar permite que trabajen chicos de hasta diez años. ¡Y esto es lo que está vigente! O sea, todavía está vigente una serie de normas muy retrógradas. Por eso, han sido banderas de lucha de los trabajadores del campo muchos de los artículos que hoy estamos tratando.

Por ello, comparto lo que han dicho varios señores senadores, particularmente el señor senador Rodríguez Saá. Después, me gustaría hacer un breve análisis sobre el tema de la democratización y libertad sindical, máxime cuando esto ha sido planteado por un peronista como es Rodríguez Saá. En verdad, me ha parecido muy buena esta introducción al debate sobre la libertad y la democracia sindical. Por supuesto que no digo esto desde un punto de vista peyorativo, sino por razones vinculadas a debates históricos o culturales de partidos como el Peronismo y la Unión Cívica Radical.

Pero lo cierto es que esta ley 22.248 no permitía la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo. Y también es verdad que, tal como plantearon los señores senadores “Freddy” Martínez y Sonia Escudero, no tiene la mejor técnica legislativa: hay una remisión para que supletoriamente se aplique la ley de contrato de trabajo, lo que representa un avance cualitativo y normativo fundamental y que establece y garantiza derechos de los trabajadores, pero no tiene la mejor técnica legislativa para su abordaje.

El proyecto que estamos tratando aborda la tercerización, el fraude laboral. Las cooperativas de trabajo –lo planteó el senador “Freddy” Martínez– son utilizadas muchas veces para el fraude laboral. Incluso la iniciativa trata la tercerización, un problema que tiene la organización de los trabajadores nacionales, que ha generado muchos conflictos sociales por el fraude laboral. Por eso comparto el artículo 15 con relación a estas agencias de servicio para provisión de trabajo, que también son utilizadas como instituto para producir el fraude laboral. Es decir, la norma que estamos considerando termina con viejos conceptos de la ley de la dictadura, la 22.248, y establece derechos.

Leí el proyecto elaborado por la UATRE. Salvo algunas normas un poco extensas contenidas en esa iniciativa, el proyecto de ley que propone el Poder Ejecutivo en materia de



derechos laborales es similar. Diría que son bandera de lucha de los trabajadores del campo. Por eso, en materia de derechos, como ha dicho el senador Juez, estamos frente a una buena ley. Por ejemplo, en el caso de la ley de la dictadura, el empleador es el que define cómo es la jornada laboral, es decir, la tipificación, la normatización de cómo estrictamente tiene que ser la jornada laboral.

En cuanto al pago de la remuneración, la ley de la dictadura plantea que se puede pagar con mercadería, con el producto que produce el trabajador. En el proyecto del Poder Ejecutivo eso está impedido. No se puede pagar si no es en efectivo y por los medios de pago normales. Es decir, hay una serie de aspectos que han sido centrales en la ley de la dictadura que la verdad hoy son dejados de lado, lo cual realmente es un avance cualitativo.

Todos estos temas son importantes. Pero desde nuestro punto de vista un avance importante –por eso vamos a votar en general a favor y en particular diría que el 90 por ciento del articulado– es con relación a la jubilación. Se baja la edad de jubilación a 57 años, con 25 años de servicios, pero se establece algo que no se ha planteado, que no se ha expuesto como un avance cualitativo para el trabajo del peón rural, por la naturaleza y características que tiene, es la actividad que mayor trabajo en negro tiene, que es una moratoria permanente: esto es, que aparte de bajar la edad jubilatoria y la cantidad de años de servicio, el proyecto establece la posibilidad de que hasta la sanción de la ley aquellos que no hubieran acreditado años de servicios, no hubieran hecho aportes, hayan sido trabajadores en negro durante veinticinco años, treinta años, pueden jubilarse, como en el sistema de amas casa, y que del haber jubilatorio se descuente el aporte por los años no aportados. De modo tal que el capítulo sobre el tema jubilatorio para el trabajador del campo es inclusivo. Vamos a incluir a miles y miles de trabajadores en todo el territorio nacional. Obviamente, el capítulo en materia jubilatoria es restrictivo respecto de la sanción del Senado, porque el nuestro no sólo iba al trabajador que está regulado por el Estatuto del Peón Rural sino que iba también al trabajador del campo que trabaja en la agroindustria, de modo tal de incluir a los trabajadores del azúcar, de la vid. Es un debate que hemos generado oportunamente porque también son trabajadores del campo.

Para lo que planteaba hace un rato la senadora Liliana Negre de Alonso, ayer le pedí al senador Pichetto que estuvieran los secretarios generales de los sindicatos generales de los sindicatos de algunos ingenios de Salta y Jujuy, como Ledesma, Tabacal, Esperanza. Agradezco que el ministro de Trabajo los reciba. Hay que ir a ver a los trabajadores del campo para saber si quieren que los incluyamos en el Estatuto del Peón Rural. Los trabajadores del campo de la agroindustria tienen sus propios convenios colectivos y un régimen de remuneraciones mayor. Es decir, están regulados por otras normativas. Directamente por la Ley de Contrato de Trabajo. Tienen convenios colectivos. Desde el punto de vista de la normativa de derechos que establece el Estatuto del Peón Rural nos van a sacar corriendo si nosotros queremos incluirlos, porque ellos están regulados por convenios colectivos y tienen regímenes remuneratorios distintos.

Digo esto para dejar en claro que para la normativa no quedan afuera. Sí quedan afuera en el tema jubilatorio. Por eso es que tomamos el compromiso que ha hecho también el ministro de Trabajo, tanto en la Cámara de Diputados como acá en el Senado, de avanzar con la ley supletoria de jubilación, porque acá solamente vamos a jubilar al trabajador que está en el Estatuto del Peón Rural, pero tenemos que agregar al trabajador del campo que hace tareas de campo y para quien se da la misma situación que el que está regulado con el Estatuto del Peón Rural en materia jubilatoria.

**Sr. Sanz.** – Solicito una interrupción.

**Sr. Presidente.** – ¿Concede la interrupción, senador Morales?

**Sr. Morales.** – Sí, como no.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Señor presidente: para dejar planteado –el senador Morales lo ha hecho con mucha claridad- más que un compromiso político que se logró en la Cámara de Diputados y luego con el ministro de Trabajo, tenemos que adelantarnos con una legislación acorde a lo que van a ser fallos judiciales, porque aquí se están violando igualdades constitucionales, no solamente la que rige en materia laboral, lo de igual remuneración, igual tarea, sino que si la igual tarea no tiene luego a través de la legislación una igual conclusión en el sistema previsional, va a haber fallos judiciales en este sentido y tenemos que adelantarnos a esa situación.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: lo que plantea el senador Sanz es estrictamente así. Por eso es que vamos a tener que ir por la norma complementaria en materia jubilatoria.

Nosotros no vamos a votar en contra de este régimen jubilatorio, porque tiene que ver con proyectos que ha presentado el radicalismo. Nosotros venimos luchando por este sistema. Así como hemos sido autores con otros legisladores del régimen de jubilación especial para los trabajadores de la construcción, queremos que los trabajadores del campo tengan un régimen especial. No vamos a votar en contra, vamos a votar a favor. No vamos a votar en contra de los derechos de los trabajadores, que han sido bandera y lucha de UATRE durante años y que terminan con la vieja rémora de la ley de la dictadura y que son un avance cualitativo en materia de derechos. No vamos a votar en contra, vamos a votar a favor de todas las normativas que mejoran cualitativamente la condición del trabajador, que establecen especificaciones en materia de seguridad e higiene, de vivienda, de remuneración, de jornada, es decir, en todos los capítulos que no quiero volver a repasar y que ya los planteó el senador Freddy Martínez.

El otro punto es la política, el tema del Renatre. El Renatre ha sido y es una buena construcción. El registro del trabajador rural es junto con otras normas que hemos tratado también –como, por ejemplo, los convenios de corresponsabilidad gremial; en su oportunidad, dimos la discusión del Renatre, de si en los convenios de corresponsabilidad gremial solamente entraban los trabajadores rurales; es un debate que tuvimos con Tomada, con el Ministerio de Trabajo–... El Ministerio también acompañó el criterio que teníamos acá porque, en Diputados, la postura era solo para que lo maneje el Renatre, en otra época. Nosotros dijimos que no puede manejarlo el Renatre porque entraría solo el peón rural. En el tema de los convenios de corresponsabilidad, también tenía que entrar la actividad de los zafreiros, de los trabajadores de las viñas, de los trabajadores del algodón, de otras actividades que están sometidas a convenios colectivos de trabajo. Pero el convenio de corresponsabilidad gremial establece un régimen de aportes previsionales, que también son estacionales, en donde el empleador paga cuando cobra la cosecha, y en donde se establecen con acuerdos tripartitos entre el Estado, empleadores y trabajadores un sistema de aportes que, aparte, es regulado con un monto fijo y que mejora la inclusión.

Es decir, las normas que han mejorado la inclusión y la formalización del trabajador rural han sido los convenios de corresponsabilidad y, también, el Renatre, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Este registro es una buena construcción, por lo que nosotros, en el debate en particular, plantearemos su mantenimiento.

Ahora bien, el Renatre ha servido como instrumento para mejorar la formalización del trabajador rural, pero el Estado no puede estar ausente. Por eso es que creemos que el

esquema de gobierno del Registro tiene que ser tripartito. Pretendemos que se siga manteniendo el Renatre, que se incorpore una representación estatal, que sea presidido por el Estado, y que también participen de él representantes de los trabajadores y de las entidades del campo. El Registro como institución ha servido hasta aquí; pero eso no quiere decir que se haya manejado bien. En ese sentido, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado me llegaron varias denuncias de los trabajadores del Renatre.

La UATRE es un gremio que ha trabajado por los derechos de los trabajadores y que ha levantado las banderas que hoy están escritas en la ley. Pero esa construcción tuvo fallas en cuanto al sistema de control, a la sindicatura. Por ejemplo, se plantearon muchas denuncias concretas, motivo por el cual presentamos varios pedidos de informes ante el Renatre, que nunca fueron contestados, sobre el manejo de los fondos. En ese sentido, la pauta es que los gastos de administración no pueden superar el 10 por ciento; un porcentaje elevado, pues, normalmente, el máximo suele ser del 4 por ciento para gastos administrativos. Sin embargo, se superaba el 10 por ciento y, en algunos años, se gastaba entre el 20 y el 30 por ciento en administración y en contratos. No quiero profundizar en ese tema pero, verdaderamente, existía un gran desmanejo y falta de control.

Entonces: ¿sirve el Renatre?, sí; ¿fue un instrumento que sirvió para incluir a los trabajadores y combatir el trabajo en negro?, sí; ¿hay que mantenerlo?, hay que mantenerlo; ¿hay que mejorar el sistema de la sindicatura?, hay que mejorarlo; ¿hay que mejorar el esquema tripartito?, hay que mejorarlo. De lo contrario, la situación se resumiría en una pelea por la caja. Por eso es que comparto lo expresado por el senador Rodríguez Saá. No queremos quedar en medio de la pelea entre el gobierno y algunos socios. Por ejemplo, ayer el "Momo" Venegas, en una reunión realizada por mi bloque, dijo que él fue uno de los primeros que llevaron a Néstor Kirchner a hacer campañas y a recorrer el país; no quiero entrar en esas cuestiones. Y ahora surgió el tema de la pelea con Moyano en la CGT, quien fue uno de los grandes constructores del esquema de concentración de poder que siempre le cuestionamos al Frente para la Victoria, y nosotros no queremos quedar en medio de esa puja.

En consecuencia, habría que ver cómo separamos la paja del trigo y hacemos lo más conveniente; considero que ese es el desafío de todos. Por eso es que creemos que el gobierno —el Estado— tiene que estar en el Renatre, pero dentro de un esquema tripartito.

El otro tema que planteó el senador Rodríguez Saá, lo cual me sorprendió gratamente, fue el de la libertad sindical, el de la democracia sindical. Ese es el debate de fondo que subyace a la pelea por el poder, que no se daría si tuviéramos otra normativa; si realmente cumpliéramos con las recomendaciones de la OIT en cuanto a la modificación de la ley 23.551, de asociaciones sindicales, en relación con los artículos 21, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 48 y 52. En ese sentido, la OIT plantea la eliminación de varias restricciones.

No comparto algunos conceptos vertidos por el senador Rodríguez Saá respecto de la cuestión del sindicato único. El modelo que plantea la Unión Cívica Radical es terminar con los esquemas de las burocracias sindicales y del sindicato único. Considero que ese es el debate de política pública que nos tenemos que dar los argentinos. La única manera de evitar la gran concentración de poder de las burocracias sindicales es con más democracia sindical, con más libertad sindical. Si el gobierno afronta esa discusión, participaremos de ella. De ese modo, impediremos la concentración de poder y el manejo de la caja por parte de algunos sindicalistas.

Es verdad lo planteado por el senador Rodríguez Saá, ya que existen burocracias sindicales que le vienen bien a todo el esquema funcional de la estructura de poder del país. A

los empresarios les viene bien hablar con "los gordos", con sindicalistas que están desde hace 30 años, porque los conocen, saben cómo operan, cómo trabajan, cuáles son los mecanismos de toma de decisión, y porque les da miedo el abordaje de la democracia sindical en virtud de que habría renovación y demás. Esta discusión –que es enarbolada como bandera por el Partido Obrero e, inclusive, por la Unión Cívica Radical, entre otras agrupaciones– acerca de los delegados de base madurará como una pera y, en algún momento, serán superadas las burocracias sindicales por los delegados de base. En ese sentido, ya la Corte dijo que hay que reconocerles la representación, aunque no estén sindicalizados e, inclusive, no abonen la cuota sindical. Si los delegados de base son legítimamente representantes de los trabajadores, la Corte ha dicho que deben ser tenidos en cuenta y que pueden asumir la representación de los trabajadores. Tal como dije, hay una realidad que va madurando como una pera y que puede caer sobre la cabeza de los burócratas de los sindicatos, de la política y de los partidos políticos.

Por lo tanto, se trata de un debate cultural. Este proyecto aborda el debate cultural de la erradicación del trabajo infantil y el tema de la familia. Por ello, establece que para contratar chicos del campo de entre 16 y 18 años estos deberán presentar el certificado de escolaridad, e impide que los niños trabajen en el campo hasta los 16 años. El desafío cultural es lograr la escolaridad de todos los chicos del país, estén donde estén; y del mismo modo tenemos que dar el debate cultural sobre la libertad y la democratización sindical. Pienso que ese es el debate de fondo.

En consecuencia, nosotros acompañaremos el proyecto en general. Estamos de acuerdo con el avance en los derechos normativos que propicia esta iniciativa. En material jubilatoria también estamos de acuerdo. De todas formas, plantearemos nuestras objeciones.

Queremos mantener el Renatre; queremos que intervenga el Ejecutivo; queremos que el Estado tenga dos directores, al igual que los trabajadores y las entidades que representan al campo. En el caso de los trabajadores, las entidades podrían elegirlos directamente, porque tanto el proyecto sancionado por Diputados como la ley 22.248 mantienen el esquema de que sean las burocracias las que elijan las representaciones. Asimismo tiene que haber un síndico por parte del Estado, y el Estado tiene que presidir el Renatre. El Estado debe participar en el Registro porque, obviamente, sirve para definir políticas públicas y combatir el empleo en negro. El Renatre ha sido una herramienta fenomenal en cuanto a estos aspectos, al igual que los convenios de corresponsabilidad. Pero los trabajadores –y no las burocracias– deberían elegir directamente a los síndicos.

En la consideración en particular sostendremos nuestra postura de mantener el Renatre, de que la representación del Estado esté garantizada, y de que los representantes de los trabajadores y de las entidades del campo sean elegidos directamente. Estas son algunas de las observaciones que tenemos, y ya expresé los aspectos que compartimos de este proyecto.

Para finalizar: tal como anticipé, mi bloque votará favorablemente en general, y en particular plantearemos las observaciones que tenemos.

**Sr. Presidente.** – Se toma nota, señor senador Morales.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.**– Señor presidente: en primer lugar, veo un nivel de consenso bastante generalizado respecto de los alcances de la iniciativa que estamos debatiendo.

Indudablemente, observo que se incurre en un error en cuanto a la persistencia, tanto del socialismo como de la Unión Cívica Radical, en el sostenimiento del instituto del Renatre tal como está concebido. Por lo tanto, me parece importante clarificar que no se trata de un

organismo tripartito, sino bipartito. Asimismo nadie mencionó a uno de los protagonistas centrales del acuerdo en relación con el funcionamiento del Renatre en los últimos 8 años: las patronales del campo, que, además, protagonizaron un gran debate que hubo en la Argentina en 2008, que fue el aumento que propició en materia de retenciones a la soja el gobierno nacional. Nadie mencionó este dato tan importante, tan central sobre quién gravita en el marco de las decisiones en este instituto denominado Renatre que este proyecto plantea derogar y darle nuevamente al Estado las funciones que le son propias, volver a vigorizar el Estado y que asuma tareas que son eminentemente de fiscalización, de control, de emisión de la libreta, de eliminación del trabajo en negro. Estas son todas tareas del Estado que habían sido delegadas al funcionamiento tanto del sindicato único –en este caso UATRE– y a las patronales del campo.

Con respecto a este funcionamiento de las patronales y el sindicato, si uno hace una evaluación de estos últimos ocho años, consideramos que no ha sido muy positiva en la eliminación del trabajo en negro.

En el marco urbano, el Ministerio de Trabajo y las políticas nacionales han ido mejorando y saliendo de la informalidad en un porcentaje realmente importante, de un 50 por ciento que había en 2003, hemos bajado a casi un 32 y, por supuesto que hay que seguir trabajando. En cambio, en el trabajo agrario estos porcentajes del 32 por ciento, lo podemos triplicar sin duda alguna y se mantienen otras formas realmente aberrantes, que son manifestaciones de lo que yo denomino el trabajo esclavo. En los últimos años ha habido actuaciones muy importantes de la AFIP que han detectado formas ignominiosas de cómo se tiene al trabajador viviendo en carpas, cómo se le da de comer, cómo no cuentan con instalaciones sanitarias. Esto lo hemos observado, ha habido un conjunto de intervenciones a lo largo y a lo ancho del país en donde se ha demostrado que en este plano la organización Renatre no ha cumplido con los objetivos.

Por lo tanto, lo que estamos planteando con este proyecto es el verdadero corazón de la ley. Quiero asumir en este debate, precisamente, que el Estado recupere la capacidad de fiscalizar, de controlar, de otorgar la libreta y de trabajar en el mejoramiento de la informalidad y del trabajo esclavo que se da en esta actividad. O sea que nosotros defendamos que el Estado recupere sus facultades. Y creo que ideológicamente los representantes de los partidos que me precedieron –lo digo con respeto, no para agraviar a nadie– también coinciden con esta idea. Por eso, considero que no es coherente fortalecer el rol del Estado y seguir delegando en un sindicato y en las patronales del campo una tarea que es propia del Estado.

Hay algunos otros temas que también se mencionaron en este debate. Parecería que esta es una embestida del gobierno nacional contra el movimiento sindical organizado, contra el movimiento obrero. Ha quedado en algunas exposiciones esta idea, por lo menos se ha manifestado en las expresiones vertidas por el senador Rodríguez Sáa, como que hay un enfrentamiento del gobierno con el movimiento obrero. Yo creo que en ningún momento esto se está dando como ha sido planteado. Fundamentalmente, el sector obrero y los sindicatos han recobrado un verdadero sentido de ser en la vida social democrática de la Argentina. En los últimos ocho años han recuperado el mecanismo de la negociación paritaria, la discusión de salarios, el derecho a la huelga, han ido mejorando en los procesos de empleo en blanco, de legalidad. Indudablemente que si uno analiza el rol del sindicato en la década anterior, con un salario que no se modificaba, con situaciones que estaban atadas al proceso de la convertibilidad, el sindicato recupera su verdadera esencia a partir de la salida de la convertibilidad y, especialmente, a partir de 2003 cuando asume Néstor Kirchner en su primer



gobierno y continúa la presidente.

Quiero decir con esto que el gobierno ha trabajado al lado del sector de los trabajadores, al lado de las organizaciones sindicales y de ninguna manera nos pueden acusar de querer desestabilizarlas o debilitarlas. Por otra parte, este proyecto de ninguna manera altera la relación del sindicato principal de UATRE con relación a otras organizaciones sindicales. Fundamentalmente, no modifica para nada. No se lo desestabiliza al gremio ni se le saca su nivel de representación. Se mantiene totalmente y, además, va a funcionar en el marco de la nueva organización con el Estado reasumiendo sus facultades en el marco del Consejo Asesor, que es el lugar que debe tener junto con otras organizaciones sociales que tienen que ver con la actividad agrícola y la actividad agraria.

Quiero hacer algunas reflexiones que surgieron desde el aporte de la senadora Negre de Alonso, a la que yo respeto mucho en lo jurídico. Ella tiene una fuerte especialización en materia comercial, razón por la cual no puedo menos que calificarla como jurista en esa materia, pero en el marco del derecho laboral creo que hay algunas imprecisiones que es necesario volver a poner en el debate. Considero que la eliminación del período a prueba es un elemento positivo en la ley y de manera alguna es un hecho negativo, al contrario. En la única actividad, repito, que se mantiene el período a prueba es en la actividad agraria. Me parece que la eliminación del período a prueba, que era una opción del empleador de despedir al trabajador en ese período cuando se le ocurriera, cuando se le diera la gana, es un dato positivo.

También son positivos la eliminación del trabajo infantil, el reconocimiento al trabajo de la mujer en la actividad rural, el derecho a la licencia por maternidad, el derecho a la huelga. Fíjense que la ley vigente, la que hoy estamos derogando, prohíbe el ejercicio del derecho de huelga y prohíbe también al sector gremial de los trabajadores del campo el ejercicio del derecho a las paritarias. Son dos derechos que demuestran claramente que esta ley estuvo concebida en la etapa de la dictadura militar, prohibición del derecho a huelga y prohibición de realizar la representación de los trabajadores en el marco de la discusión salarial y paritaria.

El senador Martínez planteó un tema que tiene que ver con el agravamiento de sanciones y la falta de competencia de la Comisión de Trabajo Agrario cuando interviene en los procesos de conflicto. Esta instancia solamente es posible si hay acuerdo de las partes y, fundamentalmente, cuando ese acuerdo se da para la intervención de la comisión, se dota a la comisión de herramientas porque si hay un arbitraje y luego alguna de las partes no se somete a ese arbitraje, indudablemente, tiene que haber un mecanismo de sanciones que funcione plenamente para poder corregir algunas situaciones que a veces se tornan arbitrarias. Muchas veces la vía de hecho provoca, incluso, distorsiones en el comportamiento social y altera la vida de múltiples sectores de la sociedad y el Ministerio y esta comisión no tiene herramienta alguna. Todos sabemos, además, la dificultad que existe en el marco legal como para poder sacarle la personería a un gremio. Eso en la Argentina nunca ha ocurrido; es una medida muy extrema y notoria que nunca se ha dado, pero estamos hablando de otro tipo de sanciones que son instrumentos.

¿Quiere una interrupción, senador Cano?

**Sr. Cano.** – Sí, solicito una interrupción.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Cano.

**Sr. Cano.** – Gracias, senador; gracias, presidente.

Quiero dejar en claro que no hay contradicción en la posición de la Unión Cívica Radical. Nosotros decimos que en el Renatre tiene que estar integrado el Estado. Lo que no



avalamos es que solo el Estado administre esos fondos, porque son fondos que tienen que ver con el aporte de los trabajadores y con la naturaleza de la seguridad social. Con el mismo criterio del senador, las obras sociales sindicales deberían ser también administradas por el Estado. Me parece que la contradicción está en lo que plantea el senador como argumento para quitarle el manejo total del Renatre a los trabajadores y a la patronal.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – No hay duda de que el 1,5 por ciento que es adicional y complementario para la conformación del fondo que administra el Renatre no tiene nada que ver con los aportes de la seguridad social y los aportes de la seguridad social y los aportes al sindicato que realizan los propios trabajadores.

De lo que estamos hablando –repito– es de la naturaleza de la función que cumple este organismo. Me parece que en su momento el Estado subrogó una obligación que le era propia y la delegó en un gremio y en las patronales del campo, lo cual es más grave, porque han tenido una fuerte gravitación en la toma de decisiones. Los efectos de la intervención en realidad no han sido para nada positivos en los últimos ocho años. Por lo tanto creemos que hay que corregir esto.

Con estos fundamentos nosotros vamos a votar positivamente este proyecto. Creemos que es una muy buena ley que implica un avance en materia de trabajo agrario. No hay que confundir con otras actividades. He notado también que en el marco de este debate algunos senadores confunden lo que es la actividad propia industrial, producto de la producción primaria, es decir, el valor agregado, que entra en otros encuadramientos sindicales; o también lo que es la actividad del empaque, que no tiene nada que ver con el trabajo agrario. El empaque tiene un encuadramiento distinto y un sindicato que lo organiza de manera diferente.

Debemos trabajar, a lo mejor, en marcos de regulación laborales. Pero esto no tiene nada que ver con el trabajo agrario. Repito: tienen encuadramientos sindicales y beneficios diferentes, incluso sueldos más jerarquizados, como bien apuntó el senador Morales, quien mencionó este tema. El encuadramiento del trabajo agrario es delimitado a la actividad agraria. Cuando hay otros componentes en la actividad se cae indudablemente en otros marcos sindicales, con otro tipo de salarios y otras remuneraciones que no son las del trabajo agrario.

Reitero: creo que es una ley que significa un gran avance y para el Estado la recuperación de atribuciones propias. De ninguna manera se excluye al sindicato, que formará parte del consejo asesor, ni a otras organizaciones que también lo conformarán. Finalmente, el Estado, que es activo, protagonista de la vida pública, económica y social, reasume un rol que nunca debió haber delegado.

Nosotros vamos a votar positivamente en general y en particular. Vamos a escuchar las observaciones en particular...

**Sr. Presidente.** – Antes de finalizar el senador Pérsico está pidiendo una interrupción, senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Ya terminé.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Pérsico.

**Sr. Pérsico.** – Solicito que se autoricen las inserciones, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – En consideración el pedido formulado por el senador Pérsico.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación.*

**Sr. Presidente.** – Se autorizan las inserciones.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Morales.

**Sr. Morales.** – Por la mecánica de votación, ¿por qué no hacemos una votación en general y luego otra en particular? Como hay distintos bloques que tienen posiciones diferentes, cada uno podría ir expresando qué vota a favor y cuáles son los cambios que plantea o lo que vota en contra.

**Sr. Presidente.** – Sugiero que se haga por títulos.

**Sr. Pichetto.** – Podemos ir avanzando por título o capítulo e ir mencionando las observaciones de los bloques.

**Sr. Presidente.** – En consideración en general el proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

**Sr. Secretario (Estrada).** – En primer lugar, cada senador debe estar sentado en su banca. Con eso queda identificado. Luego vota según su decisión, con el botón rojo o el botón verde, en el momento en que el presidente diga.

**Sr. Presidente.** – Se abre la votación en general.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Estrada).** – Resultan 68 votos afirmativos y 1 negativo.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...*<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – El proyecto ha sido aprobado en general.

En consideración en particular.

Comenzamos con el Título I...

Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** – No sé si vamos a votar por títulos. No sé cómo está organizada la votación.

Nosotros vamos a votar en contra de los artículos 3°, 5°, 6°, 7°, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 106 y 107.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – Moción de orden. Sugiero que los representantes de los distintos bloques manifiesten expresamente cuáles son los artículos que no van a acompañar para que quede constancia. Me parece que eso simplifica la cuestión.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Es una norma muy importante y debe quedar claro cómo se vota. Votemos los artículos 1° y 2° primero; por separado, del 3° al 7°; después todos hasta el 15, donde me parece que hay una observación. Donde haya alguna observación, que se vote separadamente para que quede registrado en forma electrónica en qué sentido ha votado cada senador.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Me parece que ha habido una moción del senador Rodríguez Saá y también del senador que representa al bloque de la Unión Cívica Radical, la cual comparto, de acelerar el proceso de la votación; que cada bloque haga mención de los artículos a los que se opone y que quede registrado en el Diario de Sesiones. Me parece que hay una opinión mayoritaria para votar de acuerdo a como se ha planteado.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Aquí hay que apretar rojo o verde. Entonces no puedo decir que voto en contra y apretar verde. No es así como se registran las votaciones en el sistema por el que tanto hemos luchado cuando vinimos a poner en valor nuevamente al Senado, que era que se

---

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

supiera perfectamente y la prensa tuviera por escrito inmediatamente después de la votación el sentido del voto de cada senador. Así que pido que donde no haya conflicto se vote de una sola vez y donde haya votos separados, se vote individualmente.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – En los órganos colegiados indudablemente hay una sola manera de resolver los conflictos. Me parece que por la expresión de los presidentes de los tres bloques que hemos hablado aquí en este recinto hay una posición mayoritaria para consignar cuáles son los artículos en los que se está en contra, incluso hasta fundamentar brevemente si quiere dejar constancia la senadora Escudero. Nadie le prohíbe que haga sus reflexiones en orden a que no vota determinado artículo. Pero después votemos.

**Sr. Secretario (Estrada).** – Queda constancia en el Diario de Sesiones de la manifestación de cada uno de los senadores que expresa su voluntad en un sentido o en otro. Además, no es la primera vez que se hace de esta manera. Hemos votado varias leyes de un extenso articulado como lo están proponiendo en este momento los senadores Naidenoff y Pichetto.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Giustiniani.

**Sr. Mayans.** – Son muchos artículos, presidente.

**Sr. Giustiniani.** – A ver, presidente, si podemos llegar a un consenso que me parece que es posible en orden a que tenemos una ley de 107 artículos y votar uno por uno nos llevaría muchísimo tiempo.

Lo expresado por la senadora Sonia Escudero es correcto desde el punto de vista que en cada artículo uno se pueda expresar y que quede registrado. Pero cuando votamos por capítulo también estamos ante la misma situación: aclaramos en qué estamos a favor y en qué estamos en contra.

Por lo tanto, me parece que claramente cada bloque o interbloque puede dejar claro cuáles son los artículos –ya lo había hecho el senador Rodríguez Saá– en los que está en contra.

Estamos en este momento en el tratamiento en particular. Si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra para dejar constancia de su posición, que lo haga. Pero me parece que no es contradictorio que dejemos claramente establecido en qué artículos estamos en contra. En nuestro caso, el interbloque del Frente Amplio Progresista deja constancia de que la senadora Norma Morandini, el senador Luis Juez, el senador Jaime Linares y yo votamos negativamente los artículos 15, 91, 106 y 107.

Me parece que ya el desarrollo de la argumentación lo hicieron en su momento, en representación de nuestro interbloque, los senadores Juez y Linares, de modo que esa es nuestra posición.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: en el mismo sentido de lo que acaba de plantear el senador Giustiniani, ya habiéndose expresado los presidentes de bloque, particularmente, el presidente del nuestro –también, Rodríguez Saá por el Interbloque Federal–, propongo que votemos. En este sentido, si es posible y es que hay consenso, directamente aclarando cuáles son las objeciones que tenemos; por nuestra parte, los artículos que se rechazan o que se modifican.

En nuestro caso, el senador Martínez va a plantear una incorporación y dos artículos que rechazamos, a lo que vamos a agregar que votamos en contra los artículos 106 y 107, así como los que el senador Martínez también va a indicar. El resto del articulado lo votamos a favor.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Martínez.

**Sr. Martínez.** – Tal cual decía el senador Morales, nosotros estamos votando en forma

negativa los artículos 91 y 100. Lo que habíamos planteado en su momento fue la incorporación del artículo 48 bis, que tenía que ver con el uso de agroquímicos; obligaciones del empleador.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Castillo.

**Sr. Castillo.** – Señor presidente: en el mismo sentido, el Frente Cívico y Social no va a votar favorablemente los artículos 12, 13, 106 y 107.

**Sr. Presidente.** – Entonces, parece que hay consenso en utilizar este mecanismo de votación de una vez, dejando en claro cada bloque cuáles son los artículos que no vota a favor o las incorporaciones que desea realizar.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Señor presidente: si vamos a votar todo junto, votemos a mano alzada; si no, para el periodismo podría quedar como que hemos votado en particular todo igual. A mano alzada; con esa aclaración.

Mi sentido era aclarar perfectamente qué artículos votábamos en contra y no que se votara así. Pero habiendo consenso, acepto que se vote de esa manera, aunque propongo que lo hagamos a mano alzada.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.

**Sr. Pérez Alsina.** – Señor presidente: también para aclarar el sentido de mi voto.

En líneas generales voto a favor, salvo los artículos 106 y 107.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Martínez.

**Sr. Martínez.** – Señor presidente: se me había traspapelado. Nosotros tampoco vamos a acompañar el artículo 15, que se incorpora a lo que había dicho anteriormente.

A su vez, también quiero plantear que mis expresiones responden a la posición de mi bloque.

**Sr. Presidente.** – Senador Pichetto: ¿quiere agregar algo?

**Sr. Pichetto.** – Simplemente, quiero que se analice el tema reglamentario, en términos de la obligatoriedad del uso del voto electrónico.

Me parece que esta es una norma importante como para que quede claramente registrado el voto. Yo no voy a colocarle a esta iniciativa un principio de duda por un voto informal, para ser coherente con lo que venimos hablando del trabajo en negro.

En consecuencia, entiendo que el voto tiene que quedar certificado, tal como se vota en este ámbito. Todas las leyes las hemos aprobado con voto electrónico; y el que no quiera votar, puede hacerlo en contra o abstenerse. Esta es una ley importante y no la vamos a debilitar en ninguna instancia de carácter judicial con un voto a mano alzada, cuando el Reglamento del Senado establece claramente que las leyes tienen que ser votadas con el voto electrónico.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** – No tengo inconveniente en que votemos con el voto electrónico, pero entonces votemos; son diez artículos nada más los que...

**Sr. Pichetto.** – Haga la moción...

**Sr. Rodríguez Saá.** – Nosotros tenemos doce artículos respecto de los cuales nuestro voto es diferente. Entonces, el resto del articulado lo podemos votar en conjunto.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.** – Sí, coincido. Hagamos un inventario de campo. Aquellos artículos sobre los que no hay unanimidad, quedan aparte; votamos en particular la totalidad sobre los que hay unanimidad; y aquellos otros diez o doce artículos, en una sola votación, aparte.

Agradezco la comprensión.

**Sr. Presidente.** – Muchas gracias, senador Fuentes.

Entonces, primero votaríamos aquellos artículos sobre los que hay unanimidad e incorporaríamos luego el análisis de aquellos sobre los cuales no la hay.

Tiene la palabra la senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Estamos de acuerdo, entonces, en que excluimos los artículos 3, 5, 6, 7, 15, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 91, 106 y 107. Son los artículos que se excluyen de esta votación.

**Sr. Presidente.** – ¿Algún otro bloque quiere agregar otro artículo que se excluye?

**Sr. Castillo.** – Nosotros queremos agregar los artículos 12 y 13, que vamos a votar en contra.

**Sr. Verani.** – Señor presidente: creo que si en lugar de discutir hubiésemos votado, ya iríamos por el artículo 70.

De todas maneras, me da la impresión de que si unos no quieren un artículo y otros no quieren otro, lo que vamos a hacer es una ensalada rusa. Porque va a llegar el momento en que no se sabrá quién quiso qué artículo, porque vamos a apretar el botón verde.

**Sr. Presidente.** – Por eso hemos separado los artículos en dos bloques.

Como ya se han enumerado aquellos artículos sobre los cuales no hay consenso, estos quedan excluidos de la votación en particular que ahora llevaremos adelante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 68 votos por la afirmativa, uno por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N°...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado el conjunto de artículos.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar artículo por artículo, de aquellos que quedaron excluidos. En primer lugar, artículo 3°.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 58 votos por la afirmativa, 11 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N°...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta los 5, 6 y 7 juntos, ya que forman parte del mismo bloque.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 58 votos por la afirmativa, 11 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N°...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Aprobados.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 12 y 13.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 66 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N°...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 49 votos por la afirmativa y 20 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N°...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 65 a 71.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 59 votos por la afirmativa y 10 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 91.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 106 y 107.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa y 28 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular la propuesta de la Unión Cívica Radical, en el sentido de incorporar un artículo 48 bis.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 18 votos por la afirmativa y 50 por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...<sup>1</sup>*

**Sr. Presidente.** – Se rechaza la propuesta de incorporación.

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.